
6
Colombia
Rebelde
Edición N.6 / Revista Internacional del ELN



Esta mi corazon en esta lucha.
Mi pueblo vencera.
Todos los pueblos venceran , uno a uno.
Estos dolores se exprimiran como panuelos
hasta estrujar tantas lagrimas
vertidas en socavones del desierto,
en tumbas, en escalones del martirio humano.
Pero esta cerca el tiempo victorioso.
Que sirva el odio
para que no tiemblen las manos del castigo,
que la hora llegue a su horario en el instante puro,
y el pueblo llene las calles vacias
con sus frescas y firmes dimensiones.
Aqui esta mi ternura para entonces.
La conoceis. No tengo otra bandera.

Pablo Neruda

Nicolás Rodríguez Bautista / Primer Comandante del ELN



Colombia se encuentra inmersa en un momento histórico marcado por dos elementos que, a primera vista, pudieran parecer contradictorios. Por una parte, se vive la ascendencia de la movilización y beligerancia social y popular y, por la otra, la lucha por una paz duradera con justicia social, que se manifiesta en la mesa de diálogo entre las FARC y el gobierno de Santos, y una eventual mesa con el ELN.

Una lectura más detenida del momento nos demuestra que ambos procesos no son contradictorios, sino que existe entre ellos una relación complementaria y vital, pues el éxito de la paz depende, por un lado, de la capacidad del régimen colombiano de aceptar, convivir, y brindarle garantías al ejercicio de la oposición política sin armas y por el otro, esa paz depende de la capacidad del pueblo colombiano y los llamados Sectores Medios, de lograr cambios estructurales por medio de su accionar legítimo de organización y movilización , sin ser objeto de la violencia estatal y para-estatal.

La contundente oleada de protestas sociales que ha marcado el almanaque político y social del país en lo que va del 2013, donde entre otros se destacan el paro campesino del Catatumbo (mayo-junio), el Paro Nacional Agrario y Popular (agosto-septiembre), la Minga Indígena de Resistencia (octubre), el paro estudiantil liderado por la MANE (octubre)la movilización nacional de los trabajadores del sector salud (octubre-noviembre y la marcha de las mujeres organizadas, dan testimonio del nuevo despertar que vive el campo popular colombiano.

El hecho que los levantamientos sociales se den justamente, cuando las FARC dialogan con el gobierno incluyendo el sensible asunto del fin del conflicto armado, es un asunto mayúsculo, pues demuestra que existe una relación interdependiente y trascendental entre la lucha (sin armas) por la transformación social y la lucha por la solución política al conflicto.

Por ello, como ELN, estamos convencidos que los procesos de diálogo entre la insurgencia y el gobierno deben dar eco a las demandas sociales, económicas y políticas que la sociedad colombiana expresa a través de sus luchas de la calle y del campo, sin este vital asunto, los logros de la paz son demasiado raquíticos.

No nos cansaremos de reiterar que la paz no es sinónimo del silenciamiento de los fusiles, sino que parte de resolver las causas que originaron el conflicto social político y armado. El sujeto predilecto para lograr los cambios necesarios, es el pueblo y los sectores medios, organizados y movilizados, en el ejercicio permanente de oposición al régimen y sus políticas neoliberales. La guerrilla es una expresión legítima – entre las muchas que hay – de aquel pueblo organizado, pero no puede, ni debe, otorgarse el derecho de hablar a nombre de todos. El sujeto popular colombiano se ha ganado, con inmensos sacrificios, con una muy alta cuota de sangre, el derecho a un lugar protagónico en cualquier proceso de paz.

El segundo punto acordado recientemente entre las FARC-EP y el gobierno sobre las garantías para la oposición política - que el ELN saluda con aterrizado optimismo - ha ubicado este tema en el centro del debate nacional. El acuerdo anuncia una seria de promesas por parte del gobierno para crear garantías para el ejercicio de la oposición y para que la insurgencia pueda incorporarse a la vida política. Pero, la historia de nuestro país está marcada, desde mediados del siglo XX, por amnistías a las guerrillas y promesas de respeto a la oposición política, seguido por asesinatos de dirigentes y guerrilleros desmovilizados que han dado al traste con tales promesas.

El ELN ha dicho que la verdadera política del Estado la han marcado sus hechos y no sus enunciados ante la prensa. A las movilizaciones sociales, el gobierno les ha dado un tratamiento de guerra, y no de tolerancia y diálogo, la movilización social es una expresión de oposición política tan legítima como la misma oposición parlamentaria.

Al tratamiento de guerra que el Estado le da a la movilización social se le suma la innegable reactivación del paramilitarismo. Estructuras enteras han sido movilizadas para contener a los paros y movilizaciones. Para colmo de ironías el 2 de noviembre, justamente 4 días antes del anuncio del acuerdo en el segundo punto de la agenda de negociación en la mesa de la Habana (sobre garantías para la oposición política), fue asesinado por la herramienta paramilitar el dirigente campesino César García en Cajamarca, Tolima, que lideraba el proceso de resistencia en contra de la mega-mina La Colosa, de la multinacional Anglo-Gold Ashanti. Tres días después del anuncio del acuerdo de la mesa de la Habana, el 9 de noviembre, en la ciudad de Bugalagrande fue asesinado Oscar López Triviño, trabajador de la Nestlé, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) y en los más recientes días, fue asesinado otro reclamante de tierras a manos de paramilitares, siendo este otro de varios asesinatos de la misma familiares, por reclamar sus tierras, dentro de la ley de tierras promulgada por el presidente Santos.

Como ELN, le seguiremos apostando a la Paz con justicia social. En eso seremos inclaudicables. Pero tenemos muy claro que de la posibilidad real de que el ejercicio de la oposición política y social se desarrolle sin caer víctima de la maquinaria de exterminio del Estado, depende la posibilidad real de lograr una paz duradera y ello no depende de promesas o acuerdos de papel, sino de auténticas garantías que el Estado no logra demostrar capacidad para cumplir, lo cual exige otros entes y mecanismos que puedan dar confianza y que ello no sea un acto sino un proceso.





Colombia **Rebelde**

REVISTA INTERNACIONAL
EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL

EDICIÓN
No.6 / Diciembe 2013 - Marzo 2014

CONSEJO EDITORIAL
Dirección Frente de Trabajo Internacional
Comandante Milton Hernández

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Colectivo Gráfico
Frente Internacional Milton Hérnandez

IMPRESIÓN
Talleres de la Nueva Colombia

DISTRIBUCIÓN
Sistema Inforamativo Patria Libre
SINPAL - ELN

CONSULTELA EN:
www.eln-voces.com
www.patrialibre.info
www.ranpal.net
y Páginas Hermanas.



entrevista al comandante Ramiro Vargas

Nos encontramos con el comandante Ramiro Vargas, miembro del Comando Central de nuestra organización Ejercito de Liberación Nacional, en uno de los campamentos centrales en algún lugar de las montañas de Colombia. Agradecemos al Comandante Ramiro este intercambio que estamos seguros nos dará claridad sobre aspectos políticos de la propuesta del ELN y del momento que vive nuestro país.

Revista Colombia Rebelde: Comandante, el ELN tiene una propuesta política para el país, la cual ha hecho pública. Habla también de solución política al conflicto social y armado ¿Esto significa que la una remplaza la otra?

Comandante Ramiro Vargas. De ninguna manera. El ELN tiene y ha planteado una propuesta Política para el país en la que se contempla la PAZ como construcción colectiva de los colombianos y la instauración de un gobierno de Nación, Paz y Equidad, que asuma como compromiso trabajar y hacer viable la paz real, estable y duradera.

Cuando hablamos de solución política al conflicto interno, de hecho está implícita nuestra propuesta política, que la complementa y viabiliza.

RCR: En este contexto, se habla insistentemente que el ELN y el gobierno de Santos están en conversaciones de paz. ¿Es cierto?

R.V. El discurso de paz del Presidente Santos es incoherente. Una es la idea positivista que le vende al país, dentro del interés reeleccionista y otra, la que aplica en la práctica para congraciarse con los guerreristas del ex presidente Uribe y con su propia manera de pensar.

Esa incoherencia es bien clara en el manejo que le viene dando a los posibles diálogos con el ELN. Desde hace más de un año expresó en mensajes al país que tenía interés en abrir diálogos de paz. La respuesta nuestra fue positiva y la hicimos conocer ratificando nuestra disposición de iniciar diálogos en distintas declaraciones públicas que hizo nuestra Comandancia.

La delegación del ELN designada para participar en los diálogos exploratorios, está lista desde hace varios meses. Y dejamos claro que los diálogos no se han iniciado por falta de voluntad política y decisión del gobierno.

Es en base a las afirmaciones contradictorias del gobierno que señalamos la incoherencia del Presidente sobre el tema de la paz; lo cual nos lleva a pensar que no es tanto su interés en contribuir a la solución política al conflicto social y armado y avanzar hacia la paz real, estable y duradera que reclama el pueblo colombiano, sino que está haciendo de la paz la principal bandera, de su propósito reeleccionista.

RCR: Comandante, en ese sentido, con la posibilidad de las conversaciones con el gobierno y a sabiendas de los procesos que se hicieron en otros momentos, ¿cómo entiende el ELN la solución al conflicto interno?

RV: Estamos claros que la solución política a un conflicto de más de medio siglo es una obra difícil de construir y con ella lograr la paz, que no es suficiente el querer y tener voluntad política. Pues hay que vencer muchos obstáculos de distinto orden, enfrentar fenómenos complejos como el terrorismo de Estado vigente y los grupos narcoparamilitares que tiene la ultraderecha, los arraigados intereses creados por la elite dominante, la alta deuda social por pagar al pueblo y sanear las heridas sufridas en la confrontación, entre otros.

Teniendo en cuenta esta realidad el ELN considera que la paz debe entenderse y planearse como un proceso, donde se comparta y acepte que hay muchas cosas por cambiar y construir, así como que es necesario dar pasos con flexibilidad que contribuyan a generar un ambiente de entendimiento y hechos que creen confianza mutua, donde se garantice el derecho a la participación activa y vinculante del pueblo en su condición de víctima, y se permita el apoyo transparente y respetuoso de otros gobiernos dispuestos a contribuir al proceso, que los hay de verdad.

También consideramos que la solución política al conflicto, que es social y armado, no se debe redu-



cir a un simple acuerdo entre gobierno y guerrilla, porque queda incompleta; esa paz no es duradera, si el pueblo no participa en su construcción.

RCR: Y con todo eso que Usted expone, de la violencia sistemática como forma de ejercicio del poder, ¿cómo entiende el ELN la posición de la oligarquía colombiana sobre la paz?

RV: Tenemos claro que la posición que expresa y defiende el gobierno en la mesa de diálogos, es la misma de la oligarquía ya que el Presidente es el representante de los intereses de ésta.

La oligarquía en todos los tiempos ha recurrido a la violencia para resolver unas veces sus contradicciones internas, (en el siglo XIX protagonizó ocho guerras civiles y casi un centenar de golpes de estado y levantamientos armados); en la mitad del siglo XX desató la violencia llamada liberal conservadora, a cuya sombra se hizo una nueva redistribución de la tierra y el desplazamiento de cientos de miles de campesinos que perdieron su tierra y emigraron a las ciudades, lo que favoreció, con esta fuerza de trabajo barata, el proceso de industrialización que arrancó en los años 50 del siglo pasado.

Siempre en todos los tiempos ha reprimido violentamente y con sevicia a la oposición política que considera un peligro a su poder o que lo pueda debilitar. Representando por medio de la fuerza las aspiraciones de las mayorías nacionales que acumulan insatisfacciones sociales sin soluciones hasta el día de hoy.

La oligarquía quiere una paz barata, que resuelva el problema de las armas y la desmovilización de la guerrilla, que no se ocupe de las causas que tienen en la miseria a más de 30 millones de colombianos, del régimen político represivo, la democracia de papel que es funcional a sus intereses y la doctrina militar que le sirve de soporte brutal.

Este comportamiento y visión es el mayor obstáculo para avanzar hacia la paz y desde luego choca con la del ELN, que considera el conflicto como estructural y para superarlo, se requiere soluciones de este tipo que viabilice la paz, para que ésta sea real, estable y duradera y no una caricatura de paz.

RCR: Se ve muy compleja la construcción de una salida política, nos puede decir ¿para el ELN que significa la paz en Colombia?

RV: La paz la concebimos como un proceso de construcción colectiva y no solo patrimonio del gobierno y la guerrilla; un proceso de búsqueda de soluciones reales a los problemas del país, con cambios estructurales en el Estado, el modelo económico, la sociedad y en la cultura.

La paz no es silenciamiento de las armas y la entrega de las mismas, sino y sobre todo dar cuenta de una democracia real, de un país incluyente, soberano y con justicia social.

Es un error pretender que después de más de 50 años de historia de resistencia, de frustraciones y desesperanza de las grandes mayorías del país, la paz se reduzca solo a la firma de un papel con promesas entre gobierno y guerrillas.

RCR: ¿Sin embargo, comandante hay esperanzas? Seguimos en la lucha por construir la paz. La entendemos como un proceso de construcción colectiva, ¿nos podría ampliar?

RV: El conflicto colombiano tiene profundas raíces de origen político, económico, social y de doctrina militar, originadas por las políticas públicas de los gobiernos, complejizado con la restricción de la democracia, la dependencia, el incremento de la violencia pública, el narcotráfico, el terrorismo de Estado y la guerra sucia.

Debido a la complejidad con nuevos fenómenos surgidos y las afecciones en 50 años de lucha, no es fácil resanar heridas, pagar la deuda social y cambiar costumbres de ser poder.

Por tales razones concebimos que la paz hay que abordarla como proceso colectivo donde se vaya construyendo y generando ambiente favorable, receptividad a las ideas y confianzas, de tal manera que se puedan analizar con mucha responsabilidad patriótica y objetividad las causas, visualizar las soluciones con la participación activa y vinculante del pueblo, en su condición de doble víctima: de las políticas públicas y de los efectos de la guerra.

Consideramos tres aspectos importantes en el proceso de construir la paz:

Uno, generar ambiente favorable y confianzas entre las partes, pactando un acuerdo bilateral de cese al fuego y hostilidades.

Dos, la participación del pueblo en la solución del conflicto de ahí que propongamos la constitución de un GRAN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA PAZ.

Y tres, el apoyo transparente y respetuoso de gobiernos amigos de la paz que estén dispuestos a contribuir a la solución política del conflicto interno.

RCR: Este intento con el gobierno de Santos, comandante, sería uno más de los varios que hemos intentado como Organización. ¿Por qué han fracasado los diálogos y los intentos anteriores en que ha participado el ELN?

RV: No hay que perder de vista que los gobiernos representan los intereses de la oligarquía en el poder, y por lo tanto tienen otra manera de ver el conflicto y querer resolverlo.

El mayor esfuerzo para poner fin al conflicto lo han puesto en la "pacificación", aplicando estrategias contrainsurgentes de esencia militar, en la que los poderes públicos se alían con los ejércitos privados de los narcotraficantes (narcoparamilitares) para eliminar la base social de la guerrilla, aislar ésta dentro del propósito de derrotarla y hacerla firmar un acuerdo de rendición.

Hasta el momento ésta estrategia no ha dado resultado, a pesar de los miles de millones gastados diariamente y la asesoría gringa; lo que se ha logrado es aumentar los sufrimientos de la población con hechos de guerra sucia y terrorismo de Estado.

También han recurrido a los diálogos, imponiendo un modelo donde solo se aborde la desmovilización y desarme de la guerrilla, con algunas prebendas a los arrepentidos, sin que se toque las causas del conflicto para garantizar que nada cambie, y el país y la situación del pueblo siga igual.

Este modelo de negociación también ha fracasado como lo demuestra los procesos anteriores, con las guerrillas liberales de la década del 50 lideradas por Guadalupe Salcedo y las desmovilizaciones de guerrillas de los años 90, donde no se abordaron los problemas relacionados con las causas del conflicto.

En ambos casos la paz real no se logró y el conflicto continúo con más fuerza, degradación y escalamiento.

RCR: Comandante y en ese marco histórico, ¿está el ELN dispuesto a firmar un acuerdo de paz?

RV: Claro que sí. El ELN ha estado en las dos últimas décadas dispuesto, con voluntad y convicción

Se firma la paz en Colombia



de buscar una salida de paz para el país que pare la guerra, pero no a cualquier precio o rendición indigna, como la han pretendido los gobiernos con que hemos dialogado.

RCR: La organización levantó la propuesta de Convención Nacional, ¿Usted cree que aún juega en estos momentos?

RV: La propuesta de Convención Nacional sigue vigente, es parte de ese proceso colectivo que llamamos construcción de la paz real, estable y duradera; donde los que no tienen voz, hablen y el mapa político del país se sienta participante.

RCR: Comandante, los campesinos dieron muestra de su creatividad en las formas de lucha y participación. ¿Qué lectura hace del gran acontecimiento que significaron los paros de agosto y septiembre de este año en el país?

RV: Este paro es una demostración que el pueblo está cansado de ver promesas gubernamentales incumplidas, pobreza y miseria acumulada, represión brutal contra sus insatisfacciones y los justos reclamos. De ver como se les otorga gabelas a los ricos y trasnacionales para que se enriquezcan más, ampliando la brecha entre pobres y ricos.

Los productores del campo que garantizan la seguridad alimentaría del pueblo colombiano, están abocados a la quiebra debido a la competencia desleal de productos importados a la sombra de los TLC, a la ausencia de políticas públicas para los medianos y pequeños productores del campo; a los altos costos de los insumos, del transporte etc.

El paro campesino y los pronunciamientos de sus líderes dejaron en claro la pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado, la claridad y firmeza política de los líderes del movimiento social; la justeza del paro y la respuesta brutal del gobierno que hizo florecer la solidaridad de otros sectores afectados por las políticas públicas.

El país está cambiando, nuevas generaciones de líderes han ganado conciencia de sus derechos, de las políticas públicas e instituciones generadoras de sus problemas, de la realidad y el futuro del país que les pertenece; además han ido entendiendo que es el pueblo movilizado y luchando el que logra lo que los gobiernos le niegan.

RCR: Comandante, otro problema grave de Colombia es el narcotráfico. La sociedad colombiana ha sufrido este fenómeno, uno de los más criminales del capitalismo. ¿El ELN que posición tiene frente a este problema?

RV: Un elemento central de nuestra política es el DESLINDE CATEGORICO CON EL NARCOTRAFICO. Se entiende por deslinde LA PROHIBICIÓN a la militancia elena de comprometerse en cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico. Esta decisión la tomamos desde 1986.

Primero, ninguna estructura del ELN impulsa, patrocina los cultivos de uso ilícito, ni la refinación, transporte y la distribución de drogas ilícitas.

Segundo, evita la ampliación de los cultivos de coca en las zonas de influencia y los territorios indígenas que no tienen esos cultivos.

Esta política se vio debilitada por los operativos a gran escala de las fuerzas militares del gobierno en alianza con narcotraficantes y sus ejércitos paramilitares, quienes incrementaron los cultivos de uso ilícito y los otros eslabones de la cadena del narcotráfico.

Tercero, en zonas de nuestra influencia, donde existen cultivos ilícitos, hemos adelantado campañas para la erradicación, que se viene haciendo gradualmente. Estimulando e impulsando a la vez proyectos alternativos como la ganadería, cultivos de plátano, cacao, intercalados con cultivos de pan coger.

Varios de estos proyectos se mantienen, pero otros fueron arrasados por la ofensiva del Ejército oficial y los paramilitares; así como por la falta de políticas públicas de apoyo al campesino.

Estamos de acuerdo con la sustitución de cultivos acordada con los campesinos cultivadores. Nos oponemos a las fumigaciones por sus efectos dañinos contra las comunidades y la misma naturaleza.

La solución efectiva contra el narcotráfico debe partir de reconocer la responsabilidad compartida entre países productores y consumidores, tomar medidas que afecten a quienes se quedan con el grueso de las ganancias y se lucran con ello, y no contra los campesinos cultivadores como se viene aplicando.

Se requiere de una política de Estado que brinde alternativas de Vida Digna para el campesinado cultivador, que implemente PLANES DE VIDA REGIONALES integrales y sostenibles, que garanticen la asistencia técnica, el acceso a los centros de mercadeo y se reparen los daños ambientales; además de cobertura vial, de salud y educación.

La comunidad internacional debe discutir seriamente las conveniencias e inconveniencias de la legalización de las drogas; hacer un ACUERDO MUNDIAL que establezca controles EFECTIVOS al lavado de capitales, al mercadeo de los precursores químicos; que se garantice la financiación de planes de desarrollo alternativos en las zonas de cultivos; y se le dé un trato de salud pública y no judicial al consumidor.

RCR: Finalmente comandante, ¿cómo ve el futuro del país en relación con el conflicto y las luchas sociales?

R.V: La historia de Colombia es rica en episodios de lucha social y popular, como respuesta a los abusos de autoridad, la explotación y la concentración de poder en pocas manos; de confrontación política y armada, movilizaciones y luchas callejeras en la búsqueda de soluciones a la inmensa pobreza y la restricción de la democracia que por siglos ha vivido nuestro pueblo.

Desde la lucha de los pueblos originarios contra el invasor español, el movimiento comunero de Galán, la lucha independentista de Bolívar, las luchas obreras de los años 20 y 30, del 60 y 70 del siglo pasado, las guerrillas del 50 y el movimiento guerrillero actual y los continuos movimientos de masas, han tenido un hilo conductor e invisible que nos une en la búsqueda incansable por construir un proyecto de Nación con democracia real y participativa, justicia social, independencia nacional y la concreción de un modelo económico y social propio e incluyente.

El ELN está convencido que mientras no se superen las causas estructurales que generan el desequilibrio social, económico, y político, la resistencia popular continuará viva, actuante y adquirirá nuevas formas de lucha.

La lucha de resistencia puede ser golpeada por el régimen en determinado tiempo, pero nuevas generaciones con más fuerza retomarán las banderas en defensa de la Patria y la justicia social. Mientras que las causas que originan el conflicto sigan intactas, la resistencia y la lucha del pueblo continuarán.

Hoy somos nosotros, pero mañana serán otras generaciones las que retomen nuestras banderas de lucha por un país mejor para todos, que es posible construir.

RCR: Muchas gracias Comandante Ramiro por sus palabras que estamos seguros ayudaran a los lectores a entender mejor la política de nuestra organización y su visión de sociedad y de futuro.



SANTOS: Paz y Terrorismo de Estado



Colombia se encuentra inmersa en un momento histórico de luchas y búsquedas en el camino de construir una nación con justicia social, con equidad y en paz. En este país en disputa que es Colombia, las luchas se manifiestan en diversas formas, se expresan por diversos canales y se concretan en todo el país. Se vive la ascendencia de la movilización y beligerancia campesina, indígena y estudiantil en un momento donde la búsqueda de la Paz y la justicia social están el centro del debate político y está abierta la mesa de La Habana con las Farc.

Así mismo, el gobierno de Santos continúa impulsando su modelo neoliberal y pasa por encima de las necesidades nacionales y del conjunto del pueblo. La firma y puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio con EEUU lo demuestra y eso que apenas empiezan a aflorar las consecuencias de tanta sumisión.

Santos gobierna para los intereses transnacionales y del gran capital y se presenta como el abanderado exclusivo de la paz, en medio de las operaciones contra la insurgencia, la represión indiscriminada contra la población que protesta en las calles y el asesinato de numerosos lideres del pueblo. Así se vende para estas elecciones presidenciales. Así quiere que lo veamos los colombianos.

La realidad, los hechos y no las palabras, marcan su curso y para el pueblo son de sangre. En los últimos cuatro meses más de veinte dirigentes sociales y políticos han sido asesinados por el terrorismo de Estado. Profesores, dirigentes campesinos y campesinas, indígenas, pobladores, luchadores por la restitución de sus tierras, sindicalistas, dirigentes en la lucha contra la minería extractiva y los megaproyectos, lideresas de las victimas, colombianos y colombianas que luchan en sus territorios, en las regiones, en los pequeños intersticios legales que esta democracia restringida brinda, y que al fin terminan baleados, en el mejor momento de sus vidas, asesinados planificadamente por la maquinaria de terrorismo de este Estado burgués, criminal y sin escrúpulos. (Ver parte II)

Es la respuesta de la oligarquía, que ha ejercido el poder usando la violencia contra los pobres. La historia de estos últimos setenta años está llena de crímenes contra el pueblo. Son centenares de miles de compatriotas asesinados, millones de hermanos y hermanas desplazados y arrinconados en nuestro propio país.

En este nuevo momento de lucha que se abre, donde aparece la posibilidad de una salida política al conflicto social y armado, nuestro pueblo busca sus caminos para ir construyendo la justicia social, base de cualquier paz que se quiera.

La respuesta del gobierno de Santos a las protestas que han desatado la confrontación social en lo que va del 2013, la vio el país casi en vivo y directo. El Paro Nacional Agrario y Popular (julio-agosto-septiembre) y la Minga Indígena de Resistencia (octubre), fueron reprimidos sin discriminación por las fuerzas del Estado legales e ilegales.

El ELN ha dicho que la verdadera política del Estado la marcan son sus hechos y no sus enunciados manipuladores ante la prensa. A las movilizaciones sociales, el gobierno les ha dado un tratamiento de guerra.

La misma mano que decide los legítimos operativos contra la insurgencia, ordena la represión a la protesta social y los asesinatos de los dirigentes revolucionarios del pueblo.

Al tratamiento de guerra que el Estado le da a la protesta social se le suma la reaparición del paramilitarismo. Estructuras enteras han sido reactivadas para continuar preparando los territorios de los megaproyectos y las inversiones de la gran minería extractivista.

Nuestro pueblo continúa en las batallas por la justicia social, en las grandes marchas y movilizaciones, en las concentraciones y en las huelgas. Se organiza en movimientos sociales y políticos. Ya verá el gobierno si el camino que sigue para nuestra patria es el mismo de estos 50 años o si se puede hacer política, luchar organizadamente por la justicia social y por la dignidad, sin temor a ser asesinado, perseguido o encarcelado.

No nos cansaremos de reiterar que la paz será realidad cuando se ataquen las causas del conflicto social y político que originaron la lucha armada y que mantienen en las calles al pueblo combatiente.

El ELN está convencido, solo la lucha organizada y contundente del pueblo hará posible un futuro de justicia social y paz para Colombia.

La oligarquía ha dejado su marca estatal en cientos de miles de victimas. Hace poco recordábamos que la primera desaparecida reconocida por el régimen fue la militante del ELN, Omaira Montoya Henao, detenida-desaparecida el 14 de septiembre de 1977 en Barranquilla. Decenas de miles de colombianos llenan las listas después de ella.

Santos, excelso representante de las castas que han gobernado a su antojo nuestro país, no puede continuar ocultando la realidad del terrorismo de Estado con un discurso maximalista de paz, sin parar la estructura clandestina que ejecuta esta barbarie cotidiana y que la sociedad colombiana conoce y denuncia.

II. Con Santos el terrorismo de Estado sigue vivito y matando

La realidad es la que habla y dice las verdades. Estos últimos cuatro meses del gobierno de la prosperidad democrática, muestran como el régimen combina todas las formas de lucha, legales e ilegales y continúa con su política de asesinato selectivo de los líderes políticos y sociales del pueblo.

Descabezar al movimiento social y político ha sido una estrategia de poder por parte de la oligarquía colombiana. Asesinar a sangre fría es el resultado final de la acción co-





tidiana de los organismos de inteligencia del Estado, contra los luchadores populares. Así lo demostró la misma justicia del régimen con el DAS, por poner un solo ejemplo. No importa que el Estado salga condenado. El beneficio es mayor que el costo político o económico.

El gobierno sabe a quien mata. Asesinar a compañeros como Nelson Giraldo, Adelina Gómez o Cesar García, que estaban liderando el enfrentamiento, desde procesos organizados y abiertos en sus comunidades contra los megaproyectos y la gran minería transnacional, muestra que este régimen no ha cambiado un ápice y que su esencia criminal es la misma desde que masacraron al pueblo costeño, cubriendo los intereses de la United Fruit Company, en las bananeras, el 6 de diciembre de 1928.

Estos son parte de los asesinatos de dirigentes sociales y políticos en los últimos cuatro meses del año en curso:

. Roberto Cortes, líder campesino, presidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda San Isidro, municipio de Campoalegre, departamento del Huila. Participó activamente en el reciente Paro agrario en su región arrocera. Asesinado el lunes 18 de noviembre en pleno casco urbano de Campoalegre.

. Sergio Ulcue, líder nasa, fue asesinado el domingo 17 de noviembre en Caloto, era vocero ante el Gobierno Colombiano de las Medidas Cautelares MC-97-10 que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 179 familias campesinas e indígenas de las Veredas El Vergel y El Pedregal del municipio de Caloto, departamento del Cauca.

. Miguel Ángel Conda, líder indígena y médico tradicional del pueblo Nasa fue asesinado el 15 de noviembre en la huerta familiar de su casa en la vereda Alta Mira, Bateas del resguardo de Jambaló en el Departamento del Cauca, lo que supone el quinto asesinato de una autoridad de la medicina ancestral en los últimos 18 meses.

. Óscar López Triviño fue asesinado el sábado 9 de noviembre, en Bugalagrande, departamento del Valle del Cauca. El compañero López había trabajado para Nestlé durante 25 años y era miembro del sindicato Sinaltrainal, estaba terminando una huelga de hambre contra la empresa.

. Cesar Garcia, de 37 años de edad, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Cajón, La Leona, municipio de Cajamarca, departamento del Tolima, fue asesinado el 2 de noviembre, a sangre fría, de un tiro a la cabeza mientras regresaba a su finca junto a su compañera y su hijo. Hacia parte del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca por la Defensa de la Vida, el Agua y el Alimento, organización que ha venido liderando la lucha de la comunidad contra el proyecto megaextractivo aurífero de La Colosa. El principal inversionista es la multinacional AngloGold Ashanti (AGA)

. Ana Isabel Valencia, campesina, asesinada en el municipio de Circasia, dirigente de Marcha Patriótica en Quindío e integrante del Comité Patriótico Departamental de ese movimiento político.

. Edier Otero, asesinado el 30 de octubre, era miembro de Marcha Patriótica del Quindío. El crimen ocurrió en la vereda Curumal del municipio de Génova, departamento del Quindío.

. Diana Marcela Morales Arenas lideresa, delegada de la Mesa Municipal de Participación de Victimas y delegada por el Municipio de Angostura al Comité Territorial de Justicia Transicional. La compañera apareció degollada el 22 de octubre, en la zona rural de la vereda Batea Seca, del municipio de Angostura, Norte de Antioquia.

. Ricardo Rodríguez Cajamarca, abogado y defensor de DDHH, expersonero de Acacias, Meta, asesinado el 10 de octubre.

. Nancy Vargas y Milciades Cano, sobrevivientes de la Unión Patriótica, miembros de Marcha Patriótica en el departamento del Huila, fueron asesinados el pasado 6 de octubre de 2013 por sicarios que los esperaban cerca de su finca, ubicada en el municipio de Algeciras. Participantes en el paro agrario y pertenecían a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila.

. Adelinda Gómez lideresa campesina de 36 años, asesinada el 30 de septiembre, en la vereda Cortaderas del municipio de Almaguer, en el sur del departamento del Cauca. Pertenecía al Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Hizo parte del Proceso de Mujeres Maciceñas del CIMA. La compañera recibió impactos de bala de parte de dos sicarios luego de salir de una reunión donde se encontraba discutiendo la problemática de la minería ilegal con otras mujeres líderes de la región. Adelina conducía un proceso de defensa de derechos humanos y medio ambiente en el Macizo Colombiano. En el hecho también resultó herido su hijastro de 16 años.

. Nelson Giraldo, asesinado el 17 de septiembre, líder comunitario y minero artesanal asesinado en el municipio de Ituango, Antioquia. Era líder del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que enfrentaba el megaproyecto de la Hidroeléctrica de Ituango.

. Clímaco Pernía Domicó. Dirigente embera hallado el 15 de agosto sin vida con varios impactos de arma de fuego en la zona de Río Verde, Alto Sinú, departamento de Córdoba. En los últimos meses se han registrado los crímenes de 14 personas entre ellos voceros de los derechos humanos, indígenas, un mototaxista, un profesor y un ganadero cifra que sube a 15 con el crimen de Pernía Domicó.

. Francisco Javier Ocampo, profesor caleño, reconocido defensor de derechos humanos, familiar del representante a la Cámara Iván Cepeda, asesinado el 4 de agosto a las cinco de la tarde por la policía en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en circunstancias aún no esclarecidas.

. Además hay denuncias de Cuvarandó, Nariño, Putumayo, Chocó y el Urabá antioqueño, de asesinatos de pobladores pero no dan nombres.

Según un informe emitido en octubre del 2013 por las oficinas de los Congresistas estadounidenses George Miller y Jim McGovern, en respuesta a una



solicitud de los sindicatos estadounidenses sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, punto incluido como condición para la firma del TLC "..los asesinatos tienen un nivel de impunidad de 93,4% y las amenazas de muerte tienen un nivel de impunidad asombroso de 99,9%."

El absurdo de querer la paz con una política de Estado para la guerra

El régimen actual es producto de una oligarquía criminal y mafiosa, asesina y mezquina. Sin sentido de grandeza, de patria ni nación, entregada a los intereses transnacionales y a las peores causas.

Es un régimen con una política de Estado para la guerra contra el pueblo, para el manejo del poder por la violencia, coherente y sistemática, con una doctrina de Seguridad Nacional, donde el enemigo es interno, con una estructura permanente, legal e ilegal, que pasa de gobierno a gobierno, sin cambios doctrinarios ni institucionales.

Un régimen sin política de Estado para la paz. Incoherente y desmemoriado. Sin seriedad, sin continuidad, con una visión de la paz, pegada a la coyuntura y a las necesidades a corto plazo del gobernante de turno.

Es imposible construir la paz con una política de Estado para la guerra, matando campesinos luchadores, líderes populares y golpeando al pueblo en las calles.

El proceso de paz, la construcción colectiva de esta nueva realidad que necesita Colombia requiere de un ambiente y unas condiciones para la participación de la sociedad, que en muy buena parte está en manos del Estado crearlas.

Construir la paz con la acción constante, planificada de la maquinaria aceitada del terrorismo de Estado, asesinando a nuestro pueblo y sus dirigentes, va a ser muy complicado, Presidente Santos.

Luis Carlos Guerrero S.

Cuando el Pueblo Perdio el Miedo y se Sublebo



"Nunca se había visto en el país un paro agrario nacional. Esto es un acontecimiento. Ni tampoco tanto apoyo urbano".

Este es un sentir que se ha tornado nacional. Sin duda, el hecho más relevante de la lucha popular de este siglo XXI, y podemos también afirmar con sobradas razones, que uno de los acontecimientos sociales más significativo de los ultimas cuarenta años, ha sido el levantamiento social agrario y popular iniciado el pasado 19 de agosto, que tuvo su punto más alto el 29 de agosto. Tanto por la extensión geográfica pues se expresó en todo el territorio nacional como por la diversidad de los sujetos participantes. Se destacan también las estrategias adoptadas por el Estado colombiano para minimizar, primero los alcances del paro y más tarde, manipulando la información para culpar a los indignados por la violencia y desplegando desde el inicio una poderosa maquinaria de represión para derrotar al movimiento.

El paro nacional agrario y popular es el hecho social de mayor expresión por la cantidad de fuerzas nacionales involucradas en su dinámica y por la calidad de las iniciativas desarrolladas por los movilizados, por el carácter nacional de sus reivindicaciones y la conexión fluida lograda con el país. Todo esto redundo en la legitimidad de las demandas del movimiento que estaban allí, en el acontecer de la sociedad, y que el accionar popular hizo visibles.

Una pregunta clave tenemos que hacernos: ¿porqué cuando, según todas las encuestas de opinión, la tendencia política era favorable al presidente Juan Manuel Santos, un hecho como el paro nacional, le propicia una caída en la legitimidad, según la última encuesta revelada para eso momento por la firma Gallup?.

Responder a este interrogante es vital. Estamos en un cambio de la tendencia que traía Colombia, hace 20 años, de pasividad de la ciudadanía y los pueblos, por muchos factores que aquí no vamos a

analizar. El cambio que se viene perfilando asoma desde hace unos 12 años como un despertar en la lucha social y política de las mayorías.

Con el paro agrario se catapultan y visibilizan muchas cosas de la acumulación en la resistencia. El país despertó e hizo explosión, el miedo atenazante del terrorismo de Estado desapareció y se convirtió en fuerza colectiva. Con mucha razón se ha dicho que ya a la gente no le preocupa que al protestar la acusen de ser parte de un plan desestabilizador de la guerrilla, y sale a la calle con la confianza y fuerza que da el ser colectivo. Este es uno de los cambios que debemos saber apreciar.

Pero, para avanzar en unas tesis, sería entonces muy importante recordar algunos de los antecedentes que condujeron al desarrollo de la mayor indignación popular nacional, dado que, desde hace un tiempo para acá, el movimiento social ha venido aumentando sus luchas de resistencias a las políticas neoliberales del régimen; sometido a que hemos vivido un apabullante modelo de sociedad que fomentó hambre, ruina y más exclusión, cediendo el territorio nacional a las las transnacionales y a los Estados Unidos que ahora ejecuta una nueva invasión que a diferencia de la llegada de los europeos hace cinco siglos, cuenta con el papel activo de una fracción social criolla coaligada a esos poderes imperiales colonialistas.

La crisis colombiana: Muchos problemas acumulados

La crisis social tiene dimensiones profundas, amplias y complejas que desbordan cualquier capacidad de manipulación de los medios oficiales de comunicación. Estos por el contrario han agudizado su función de criminalización de la pobreza y la protesta, por ello caracterizaron al paro nacional como la reunión de estos dos males del progreso.

La crisis no solo toca a los pobres y los miserables; ha tocado y afecta a capas medias y aburguesadas de la sociedad que ven paulatinamente hacer su tránsito a la ruina si no logran permanecer conectadas a los circuitos de los oligopolios nacionales o a las grandes transnacionales. Según el columnista, ahora candidato al senado por el Polo Democrático Alternativo, Diego Otero Prada un factor de la crisis lo constituye la ausencia de trabajo digno; también la exclusión de oportunidades de contratación laboral y de celebración de contratos, el cual es esquivo para centenares de miles de egresados de las universidades y profesionales. Y ahora le tocó el turno a las sociedades de ingenieros y a las diferentes profesiones en general, los cuales también se sienten indignadas. Es muy grave, la actitud de la institucionalidad las cuales, en sus pliegos de contratación, han establecido condiciones que favorecen a las empresas extranjeras o a grandes conglomerados colombianos.

A la destrucción de la industria y la agricultura le vienen pegaditas otras destrucciones no menos importantes para el país: la ciencia, la tecnología y toda la rama de las ingenierías agrícolas, de la metalmecánica y otras. El saqueo de nuestras riquezas toca a los bienes naturales, a los bienes inmateriales, la información genética de las semillas y a las mentes brillantes de nuestros intelectuales que a diario producen desarrollos tecnológicos que son acaparados por multinacionales. Esto ha venido aparejado a otro fenómeno, la compra de importantes empresas de ingeniería por empresas extranjeras, situación que ha comenzado a darse también en el sector educativo, ya que han llegado universidades de quinta categoría a comprar universidades colombianas. Y el gobierno favorece esa política.

Demasiado lesivo que las ingenierías sean desplazadas del mercado nacional por las empresas privadas con capital extranjero, colocada como subcontratista de empresas extranjeras. La ingeniería ha sido un factor clave para el desarrollo del país, fue la que propulso la infraestructura que hoy se está derrumbando. Muchos nos identificamos en que ha habido una inmensa destrucción de capacidad de trabajo productivo, de trabajo nacional lo cual se ha hecho para favorecer la inversión extranjera. Hoy es más claro el menosprecio a la fuerza de trabajo nacional y al mercado interno laboral mirando lo que está pasando en la construcción de la nueva refinería en Cartagena, donde para lograr la contratación de trabajadores raizales de la ciudad se ha tenido que adelantar varios movimientos de lucha. Y aun así la proporción es baja.

En el sector energético ha primado, desde los años noventa del siglo pasado, en la conducción los enfoques e intereses de neoliberales que son los que han definido las reglas y dirigido realmente la orientación del sector. En lugar de colocarse esta riqueza en función del desarrollo económico del país, para la realización de los derechos universales de salud, educación, vivienda, etc., estos bienes han sido dilapidados a las transnacionales. Son ellas las que han diseñado las fórmulas tarifarias y los precios de los energéticos que han hecho que Colombia tenga unos precios muy altos comparados internacionalmente, que han beneficiado los intereses privados. Pagar 5 dólares por un galón de gasolina en un país que produce un millón de barriles de petróleo diarios es una injusticia que quiebra al bolsillo de millones de colombianos.



Despojo territorial, despojo legislativo

No hay duda que el capitalismo neoliberal está en la raíz de la crisis actual. Las políticas de aperturas de la economía y la flexibilización laboral, la flexibilización ambiental, los TLC, las locomotoras del llamado desarrollo y otras han llevado a una reconfiguración de toda la sociedad, aumentando la exclusión social y diseminando aún más la pobreza y el pillaje. Es tanto el pillaje, que nos puede parecer increíble que el 90 por ciento de las tierras urbanas de la ciudad de Cali, para tomar un ejemplo, estén en manos de las corporaciones o hayan sido apropiada por intereses privados; y como sucede en todas las ciudades este apropiamiento del suelo por los monopolios privados se ha producido mediante la ejecución de una criminal política de desposesión a las comunidades urbanas que por decenas de años han construido el territorio para el disfrute colectivo y público.

En este sentido los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), lo que hacen es legalizar esta situación de desposesión y pillaje; pero yendo un poco más al fondo, al mismo tiempo se devela que lo privado son las mafias de narco-paramilitares que se encadenan con los grupos económicos y los grupos económicos se encadenan con las mafias paramilitares y estos se entrecruzan con los medios de comunicación y el poder de los políticos. O sea todo este entrecruces de los poderes ha ido originando una nueva casta oligárquica urbana que va despojando a los pobladores de la ciudad.



Las mayorías nacionales nos enfrentamos al despojo legislativo. En Colombia la oligarquía hace todo lo posible por no aplicar las pocas leyes que favorecen a las mayorías y siempre se le afilan sus garras y trampas para evadirlas; sucede con la Ley 164 sobre Zonas de Reserva Campesina a la cual se le niega su implementación pues allí están consignados derechos de la población campesina. Igual sucede con la Ley 94 la cual establece la Titulación de Territorios Colectivos, la Constitución de Consejos Comunitarios y la Autonomía Organizativa a las Comunidades Negras. A esta ley se le tuerce el pescuezo reduciendo sus alcances con el fin de facilitar la expropiación de tierras comunales y comunitarias rurales y urbanas, a estas últimas se les niega la titulación colectiva para que sean apropiadas por los grandes urbanizadores.

Las pocas herramientas para reclamar derechos, como la Consulta Previa a las comunidades negras e indígenas para el adelanto de proyectos que toquen su territorialidad se viene estigmatizando como un instrumento nefasto de las minorías para bloquear el desarrollo.

Los espacios de participación social están llenas de trampas y condicionamientos donde son las mismas instituciones cuestionadas las que deciden, como en el caso de los referendos por vía popular donde es el Congreso de la República, quien decide si se hace o no y define los contenidos del mismo, de tal manera que queda hipotecada la voluntad popular a una institución cuestionada.

Las sucesivas reformas a la Constitución del 91 le han mellado su lado progresista y de cambio. En su lugar, todo el ordenamiento jurídico se ha ido adaptando a las exigencias del modelo neoliberal, del capital y desfavoreciendo los derechos a la población. Igual curso se está perfilando en la legislación de la restitución de tierras.

No deja de ser paradójico un país donde se aprueba una legislación de restitución de tierras y al que la reclama se le asesina, al que la recupera se le reprime y expulsa; un país donde se legisla para reducir la informalidad de la economía pero se persigue y destruyen las plazas de mercados, se produce desalojo de los espacios públicos a los trabajadores ambulantes y se ofrecen primer empleo a los jóvenes pero con menos salarios o sea para explotarle más su capacidad de trabajo. Es un país donde se acuerdan tratados asimétricos que profundizan la desigualdad social, reduce la cúpula de los ricos, amplia la pobreza y condena a la ruina a las clases medias.

Somos un país donde se ordena construir un mapa de páramos por la institución ministerial del medio ambiente pero se niega a reconocerlo porque en lugar de disminuirse el territorio, el nuevo mapa los aumenta pasando de 1 millón 900 mil a 2 millones 900 mil hectáreas que deben ser protegidos y no permitir el establecimiento de explotaciones mineras; el Ministerio fue por lana y salió trasquilado.

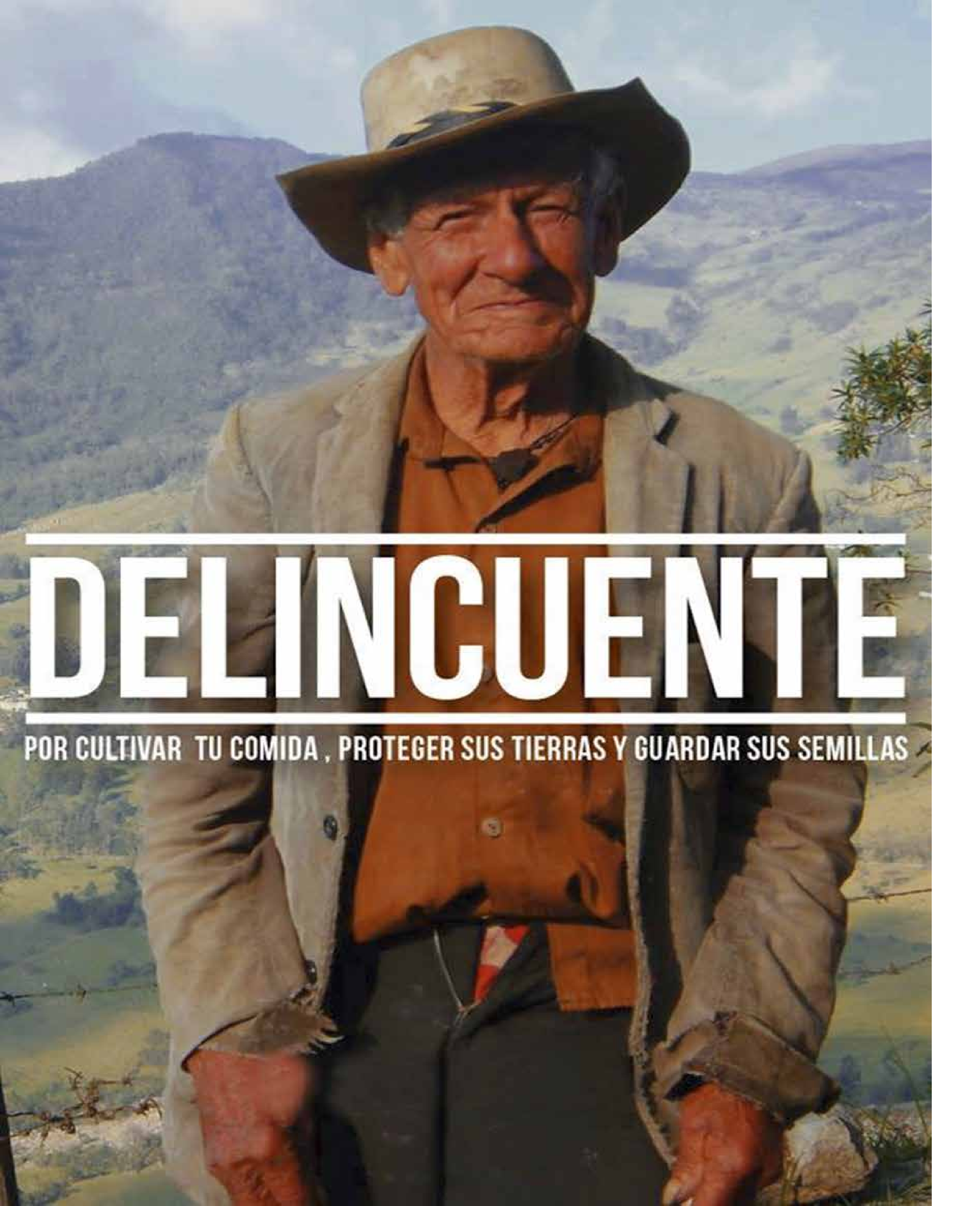
El puntillazo del TLC

En este contexto, el TLC ha sido el puntillazo para la agricultura mediana y pequeña, para proseguir el curso de la desindustrialización, para atacar las bases de la seguridad y soberanía alimentaria que va quedando a manos de las transnacionales alimentarias que ahora poseen el monopolio de las semillas, o sea determinan quien produce y quien y como se alimenta. Algunas opiniones, las que compartimos, van en la vía de que estamos asistiendo a la desnacionalización del país.

Una de las pruebas más contundente de la desnacionalización del país es la prohibición del uso de las semillas nativas o raizales por parte de los cultivadores colombianos como lo estableció el decreto 970. Decreto por demás antinacional, colonialista y sepulturero por cuanto manda al cementerio toda la cultura productora de nuestras gentes del campo y nos somete a la dependencia alimentaria y le da garantías a las transnacionales de que sus semillas serían las que controlarían el mercado así sean estas de menos valor nutritivo. Y cuando el campesino haya sustituido la semilla original por la transgénica se verá encadenado a la transnacional pues para cultivar tiene que comprarle la semilla a ella.

La gente campesina y toda Colombia apenas se ha enterado del nuevo negocio con las semillas a raíz de la destrucción de miles de toneladas de arroz en el Departamento del Huila por que los productores de arroz no podían recolectar la semilla y hacer nueva cosecha al ser semilla certificada (ver video 970 en You Tube). Y con el paro nacional comenzaron a forjar la rebelión de la semilla y con seguridad va a llevar a que nuestra gente del campo materialice alternativas subversivas como ya ha pasado en la historia cuando las negras y los negros transportaban las semillas en los cabellos ensortijados para garantizar la seguridad alimentaria en sus palenques.

Todo este panorama adverso para la vida de los colombianos va produciendo un estado de conciencia en una franja social que cuestionan y descreen del ordenamiento político, sus instituciones y agrupaciones políticas que solo se acercan al poblador en tiempos electorales. Franja social que ha ido organizando un tejido social y político que hizo posible el impulso y convocatoria del paro nacional del 19 de agosto. Los partidos políticos tradicionales, las instituciones estatales y las agremiaciones económicas de los poderosos van siendo percibidos muy lejanos y distantes de las necesidades de la gente y en defensa de sus intereses y ganancias y las de sus amos del Norte. Signos de ilegitimidad corren en nuestra patria.



El capitalismo se ha enloquecido de avaricia, olvidó las realidades sociales, dejó desde rato el poco corazón que le quedaba para evitar el surgimiento de proyectos alternativos, y se dedicó a hacer billete. Las enormes ganancias del sistema bancario así lo evidencian. Y este modelo de capitalismo ha llevado a que la gente quede al margen y en la basura. Y como la vida es un asunto social, la gente ha salido a resistir y estrellar su ira. Y este es un derecho que tiene. El Paro Nacional Agrario llevó a las calles, vías y plazas de Colombia, la indignación represada por decenios y puso en manos del gobierno pliegos de exigencias perentorias.

En los gritos y acciones de la gente así como en las mesas de negociación no aparecieron sólo reivindicaciones puntuales sino evaluaciones críticas de las políticas económicas y de las políticas en su conjunto.

Qué hermoso oír hablar a los campesinos de los estragos de los tratados de libre comercio. No fueron necesarios charlas, conferencias y arengas para explicarles el daño de los TLCs. Ellos lo están sintiendo en carne propia. Comprenden como perjudican sus intereses.

Los pobladores urbanos, los industriales, los ingenieros, los consultores, los trabajadores ambulantes, la gente que vive del rebusque y los zapateros, las microempresas van cayendo en cuenta de lo perjudicial que es la política económica neoliberal para la producción nacional, que está siendo suplantada por la proveniente del extranjero.

Algunos antecedentes Del levantamiento social

El paro nacional constató la tesis: asistimos a un aumento de las luchas sociales en Colombia, lo cual obedece a la crisis social que va generando el neoliberalismo aplicado durante decenios. Esta es la base de la crisis de la sociedad que se manifiesta en una diversidad de resistencias que ha tenido su punto más alto, de movilización, en el paro nacional agrario y popular.

El paro nacional, si bien expresó un estado de indignación nacional, hunde sus raíces en todo un proceso de reconstrucción social y política, iniciado desde hace 12 años, ante el genocidio producido por el terrorismo de Estado que impuso a sangre y fuego el neoliberalismo. Sin esa destrucción social, económica y política y el cierre al debate de ideas no hubiera sido posible instaurar el mismo.

En este contexto, las jornadas recientes de movilización, que anteceden al paro nacional, tienen entre sus protagonistas principales a los productores agrícolas, los camioneros y los mineros informales y artesanales, también a los indígenas con sus mingas comunitarias nacionales por la vida, a los estudiantes universitarios opuestos a una reforma a la Ley 30 y por un nuevo modelo educativo, a los trabajadores de los enclaves agroindustriales y energéticos, a las regiones que se han movilizado en defensa del agua y los derechos de la naturaleza ante la locomotora minera como Santurbán, Ituango, La Colosa en Cajamarca, Tolima y otras decenas más. Se trata en cada caso, como es lógico, protestas relacionadas con el modelo económico vigente.

Aunque sean estos son los más visibles, es bueno echar una revisión de las movilizaciones durante todo el año la cual nos muestra un espectro más amplio de actores y de motivaciones. Solo en el mes de julio hubo protestas de muy diversos tipos, entre las que mencionamos:

- La larga resistencia campesina en la región del Catatumbo que se mantuvo por más de 20 días demandando la reglamentación de la Zona de Reserva campesina en esa región.
- La protesta nacional de los mineros artesanales, medios y pequeños a causa de la criminalización de su oficio ancestral y de las preferencias establecidas hacia las explotaciones mineras a gran escala. El régimen aduce que como son economías informales y por tanto ilegales se les debe expropiar sus bienes y territorios.
- La movilización y paro nacional de los campesinos cafeteros por el incumplimiento de acuerdos previos.
- Las acciones de inconformidad de paperos, cebolleros, paneleros, cacaoteros, arroceros y lecheros que anunciaron desde meses atrás la realización del Paro Nacional Agrario por las políticas del TLC.
- Los empresarios minoritarios de calzado que organizaron una jornada de protesta por los efectos de los Tratados de Libre Comercio (TLC).
- Las protestas nacionales de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Rama Judicial y la indignación nacional que echo atrás el paquetazo de la reforma a la justicia.
- Las permanentes movilizaciones de los usuarios, estudiantes, medicos y de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud en reivindicación de la salud pública como derecho universal gratuito para todos.
- Las organizaciones cívicas se unieron con las ambientalistas para exigir la consulta previa en proyectos masivos de transporte que amenazaban con la tala de árboles.
- Además de estas acciones hay otras más recurrentes: en las ciudades de la región Caribe no pasa una semana sin que los habitantes salgan



a protestar por las deficiencias y los altos costos de la energía eléctrica; en veredas y corregimientos de todo el país hay un aumento palpable de las acciones para exigir más maestros rurales y presupuestos adecuados; las protestas contra el sistema de cobro de valorizaciones en las ciudades principales del país impuesto que hace recaer el pago de obras y de infraestructura en la población.

- Se han realizado huelgas de trabajadores petroleros y de la industria del carbón. Es frecuente la inconformidad de los transportadores por los precios de la gasolina y los impuestos de rodamiento o de vías.
- Campesinos protestan por la falta de proteccionismo y los efectos negativos en el agro de los TLC.
- Indudablemente todo este ambiente de resistencias y de luchas por derechos han propiciado el surgimiento y potenciación de movimientos políticos y movimientos sociales, entre ellos la agrupación DIGNIDAD AGROPECUARIA, MESA DE UNIDAD Y ACCION AGRARIA (MIA), EL COORDINADOR NACIONAL AGRARIO. También la conformación de MARCHA PATRIOTICA, CONGRESO DE LOS PUEBLOS que articulan procesos sociales y políticos en la vía de construir movimientos políticos alternativos, los cuales se suman a los existentes como el POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, PIDO LA PALABRA. Pero también en los ámbitos locales y regionales han ido configurándo unos sistemas organizativos donde confluyen luchas y propósitos de construcciones regionales alternativas.

Por esto mismo, lo que vemos ahora es la revelación del largo proceso de organización social que ha venido cocinando en Colombia. Aún con sus altibajos e inconsistencias como en todo proceso, sus complejidades, sus debilidades unitarias, la disgregación de sus demandas y agendas, hay un aumento de fuerza y de potencia social.

Levantamiento del pueblo

El levantamiento popular más allá de ser un movimiento de masas, ha sido una insurgencia social de sujetos sociales, anclados en familias y pueblos en unos territorios que significan la vida. Se trata de una cadena muy larga de problemáticas que producen un efecto en cadena de reacciones contundentes como única alternativa para defender el último bastión de la sociedad colombiana: la familia. Al decir de Fernando Dorado, activista social, irrumpió una Nueva Ciudadanía.

Fue la indignación de Pueblos enteros movilizados desde sus culturas y aspiraciones de buen vivir que han sido destruidos por el modelo neoliberal; provincias y localidades insurgidas indignadas ante la destrucción del entorno territorial donde celebran y cultivan la vida sus millones de habitantes. Entendemos que detrás del levantamiento cundiboyacense lo que está son centenares de miles de familias que han vivido y mantenido su existencia a partir de cultivar la papa y todos los alimentos de clima frio y que está en riesgo de desaparecer como pueblo y comunidad por el TLC. Un estudiante de Boyacá en una denuncia decía: "Hemos sostenido la familia con el cultivo de papa, nos ha dado la posibilidad de estudiar, vivir en comunidad; pero hoy tenemos la finca empeñada, los costos de producción son altos y para colmo de remate no podemos vender la papa por que el mercado está copado por importaciones".

Los cacerolazos, expresión masiva nacional de solidaridad y repudio, surgido por el desconocimiento de los gobernantes ridiculizando el paro nacional (discurso de Juan Manuel Santos) quienes retaron a los movilizados y la sociedad a demostrar que había de verdad una parálisis del país, fue una explosión de conciencia donde ciudadanos de todas las ciudades más importantes de Colombia, encontraron una manera digna de manifestar que el paro era de todos, habitantes del campo y la ciudad, de las barriadas populares cansadas de tanta injusticia. Que la pelea por la soberanía y la vida era de todos.

Los cacerolazos tuvieron esa doble dimensión, de ser parte de una movilización nacional y el desarrollo de la auténtica solidaridad que coloca en el centro la identidad con el otro, como él, sujeto oprimido y excluido que sufre la injusticia. Es una nación la que se indigna desesperada y cansada de tanta justificación insolente a los abandonos milenarios, de ver rodarse el balón de un gobernante a otro que acusa al compinche y a otro oligarca como él de ser el responsables de la tragedia nacional. Enfrentando juntos, campos y ciudad, una misma situación a pesar de los intentos del régimen de dividir el movimiento.

Jóvenes y mujeres una Arteria en el movimiento nacional

Jóvenes sin trabajo digno a quienes les quieren obligar e imponer como única condición de futuro que ingresen al servicio militar obligatorio para enviarlos a los campos de batalla a combatir a otros hermanos que insurgen como ellos, los insurgentes guerrilleros. Estos jóvenes, llenando las columnas de desposeídos en marcha, clamaron a nivel nacional porque esa figura de servicio militar sea erradicada de la sociedad colombiana porque es hasta ahora el llamado oligarca de defender unas instituciones generadores de injusticia; una democracia que no les consulta ni tienen en cuenta sus opiniones y aspiraciones para definir el rumbo del país; a un modelo que produce muerte y destrucción de la naturaleza y de hermanos colombianos.

En fin, los jóvenes se articularon al paro con una expresión autentica: la objeción del servicio militar por conciencia, pues se cuestionan para que enrolarse a las fuerzas armadas que no defiende la soberanía sino la entrega del país y que en lugar de alzarse erguida ante los saqueadores se rinde y postra de rodillas ante el imperio descargando la brutalidad genocida contra ellos mismos en las calles cuando se movilizan en reclamo de reivindicaciones. Los jó-



ve-nes entienden que un servicio a unas Fuerzas armadas apátridas que mantienen una guerra injusta para mantener un orden injusto no puede ser apoyado.

El sello juvenil estuvo presente en la juventud campesina, indígena, negra, de los pobladores urbanos, ambientalistas, estudiantil, trabajadora, en toda una amplitud.

Lo bueno del 29 de agosto de 2013 es que esta vez los jóvenes sí salieron masivamente y fueron muchos, mujeres y hombres, se pusieron la ruana, pero no solo fueron los jóvenes de la ciudad, también los jóvenes del campo, una fuerza nacional de sociedad que liderará los cambios.

Hay que ver el ímpetu de la mujer que viene siendo un sujeto social de mucha presencia y protagonismo que encarna los problemas del país y apuesta por los cambios. Este aspecto hoy requiere una mayor atención, no solo en relación al levantamiento social popular que vivimos sino porque en estos 12 años ha elevado de manera vigorosa su participación.

La gente ya cansó del capitalismo, aunque no lo llame así con tanta claridad. Pero hay además un fenómeno novedoso y significativo: la fuerza de la organización. No obstante las terribles violencias que se precipitaron sobre el campesinado, los indígenas y afrodescendientes, sobre los colonos, las organizaciones se lograron preservar y salieron fortalecidas y juntas todas, se han relanzado, al tiempo que han creado otras nuevas. En muchas regiones del campo convergieron Juntas de Acción Comunal, núcleos de la vieja ANUC, algunos sindicatos, cooperativas, numerosas ONG, etc. Todo un enjambre organizativo y por ellos las concentraciones en los puntos de bloqueos y de parálisis se constituyeron en asambleas de abejas.

Indudablemente el paro nacional reveló que ha habido significativos cambios culturales en el movimiento social y el movimiento político colombiano. El paisaje organizativo se acompaña en alguna medida de un desarrollo cultural que ciertamente no comprende a todo el campo colombiano pero que se advierte en diversas regiones por el aumento de la alfabetización, los grados de educación que ha alcanzado la nueva generación de campesinos y que hoy accede al manejo y utilización de las tecnologías comunicativas. Hoy los campesinos de regiones apartadas pueden comunicarse en segundos con otros movimientos sociales y con instituciones y movimientos internacionales. Los campesinos se han capacitado ellos mismos pero han surgidos jóvenes intelectuales desde sus entrañas mismas.

La ruptura del Monopolio de la información

La manida matriz comunicacional del régimen que sostiene que las protestas obedecen a manipulación de la insurgencia sufrió una aparatosa derrota por la fuerza de esta sublevación. Y si fuese así, entonces la fuerza de la insurgencia guerrillera es muy grande y quedaría hecho añicos la otra matriz: la guerrilla está aislada y es una minoría. Lo cierto es que más allá de la guerrilla, su estado de incidencia en el país y toda una suerte de percepciones, lo que hay evidente hoy para el mundo y la propia Colombia es que hay una insurgencia popular, caracterizada hace años por el líder Orlando Fals Borda, como el poder de la gente del común constituyéndose en sujeto de transformaciones creando institucionalidad.



Ahora, gracias a las tecnologías digitales y el salto tecnológico en las comunicaciones las situaciones de crisis sociales, la frustración, el desespero, los miedos y las esperanzas se pueden socializar mayormente y a grandes velocidades. Si hasta hace años una chispa podía incendiar la pradera, ahora las redes sociales están convocando o pueden posibilitar los levantamientos sociales masivos y conectar la esperanza de miles y de millones de personas en una acción colectiva. Las familias y comunidades pueden trasmitir sus sentimientos y convocarse por las poderosas redes inalámbricas jugando un papel clave la comunicación. Este es uno de los nervios centrales para forjar movimientos sociales, potenciar los movimientos políticos y construir opiniones.

No estamos solo haciendo referencia a las redes sociales digitales, más allá incluso de las redes digitales, la figura de red social construida a partir de la inquietud, la inconformidad o la problemática transmitida de boca en boca, en el escenario de la cotidianidad, en el ejercicio natural del ser humano, necesario incluso para la vida en sociedad.

En el movimiento de sublevación nacional se combinaron magistralmente las redes sociales por internet, medios inalámbricos, con las redes sociales comunitarias de la vida, las redes del tejido social comunitario de organizaciones sociales, de agrupaciones, de cooperativas, sindicatos, de mesas de trabajo y movimientos, de comités. En fin, la comunicación, tan vital para forjar movimiento social, legitimar y motivar la acción colectiva de la gente, jugo un papel convocante para aumentar y enlazar la protesta, responder a las mentiras del régimen jugando un papel informativo; para interconectar los cientos de bloqueos de los movilizados en todo el país, para conectar propuestas e iniciativas. Así estas herramientas y tecnologías de la comunicación fueron un vehículo significativo para robustecer, sincronizar y aumentar la fuerza de la dignidad y la ira. Algunos han estatuido el criterio de la movilización de la indignación cibernética.

Miles de videos y millones de trinos se difundieron rompiendo la censura que imponía el régimen autoritario neoliberal. A través de ellos se difundieron las arbitrariedades de los cuerpos policiales especialmente el ESMAD. Cada hecho fue difundido y grabado por los miles de periodistas populares y la fuerza de la lucha convirtió a cada sublevado en un comunicador social y periodista popular indignado. Se volvió una frase de moda: "graben y que lo suban enseguida a YOTU" gritaba una mujer que enfrentaba un allanamiento del ESMAD en el Cauca, haciendo alusión a la denuncias de atropellos y los desmanes de la Fuerza Pública para que fueran grabadas y colocadas al servicio de todo el movimiento social en YOU TUBE, una ventana de videos al mundo.

Hoy la impunidad no es fácil pues están registrados miles de testimonios de la brutalidad del régimen;



pero también hoy la memoria histórica es más fácil de difundir y mantener porque hay registros fílmicos de las luchas y resistencias de los pueblos, de los discursos y consignas de los líderes y de la comunidad movilizadas, testimonios de la insurgencia de un pueblo que no se deja imponer los designios del NO FUTURO. El levantamiento popular de agosto cotidianizo la política.

Los medios de comunicación perdieron el privilegio de la verdad pública; la gente sintió que mienten, que dicen la verdad de sus amos: el empresario, el gobierno, el anunciante, los dioses del privilegio. Los medios están perdiendo la credibilidad ciudadana, que es su mayor valor. La verdad mediática sucumbe con la aparición de las redes sociales, por

eso ya no se depende en el movimiento social de los medios masivos para saber lo que pasa en el mundo, ahora vía internet y redes sociales podemos conocer verdades parciales pero con el poder testimonial de los mensajes y eso ya significa mucho. Los medios oficiales ya no tienen la hegemonía de la verdad, está en permanente disputa y su versión ya es solo eso, una versión más de la realidad.

Y la censura fue rota. La presencia de un pueblo insurgente, protagonista durante días y semanas no se pudo esconder, ni la realidad de un país paralizado por sus cuatro costados, unas ciudades asediadas y tomadas por la gente en movimiento, que le recordaron al Estado y la clase dominante que nosotros podemos parar el país porque somos el sustento forjador principal de él.

Muchas maneras de movilizarse, varias maneras de ser pueblo

El levantamiento nacional de agosto expresa el alto grado de indignación de la gente ante tanta injusticia y tantos aplazamientos a sus exigencias, a los derechos y a los acuerdos incumplidos por el Estado. Todo el repudio acumulado se convirtió en marea colectiva forjada a través de las familias, las comunidades y todo el tejido social de pueblos trenzados en resistencias, en proyectos de vida y en sueños. Al fin y al cabo, tejidos colectivos y colectivizados entre comunidades, pueblos, procesos y gente, simplemente gente burlada y arrinconada, que encontró en este movimiento lugar para su expresión, alentados por la fe y la esperanza, que ahora si podían conseguir sus derechos o al menos gritar y manifestar de frente al gobierno su inconformidad, y lo hicieron perdiendo el miedo.

Fue una fiesta colectiva por la justicia, de todos y todas, pobres, empobrecidos y clase media querían cobrarle algo al gobierno. No hubo un centro nacional o pliego nacional reivindicativo, se juntaron las demandas y exigencias de todos por eso fue muy difícil unificar una negociación nacional por que también casi nadie quería delegar la representación en otros sino asumir la propia representación de sus intereses, demandas aplazadas y muchas veces peleadas y batalladas. Y por qué el dialogo entre los movimientos ha sido postergado por años y años de división y sectarismos. Aquí residió su fuerza y que cualquier gremio y expresión se sumara con facilidad, desde lo local, desde las regiones y desde lo nacional, sin condiciones ni exclusiones, de que tenía que estar de acuerdo con



x o y agenda; pues la agenda era la vida misma convertida en capacidad de fluidez.

Fue una acción que se diseminó por todo el tejido del país, con pequeñas luchas y también con las masivas demostraciones, pero todas sumando a la indignación, a la sublevación nacional. Arrancó el 19 de agosto en algunas localidades lo que llevó al Presidente a vociferar que el paro no era del alcance que se había manifestado; incomprendida su magnitud por venir de la abismal crisis social que conmueve al país pero que no conmueve los sillones oligárquicos. No alcanzó a apreciar los efectos del desastre provocado por ellos y son incapaces de ver que hay un pueblo que han despreciado; que las mayorías aunque permanezcan mucho tiempo dormidas son huracanes y cual volcanes hacen erupción por la esperanza y la justicia.

El paro de agosto fue indignación de los pueblos campesinos al conocer que han sido engañados por la oligarquía quien le vendió la ilusión de un país mejor con el TLC, les dio a conocer que otro país para todos estaba germinando; una oligarquía que le escondió a todo el país que ya nuestras semillas originarias que sustentan la cultura de soberanía y seguridad alimentaria no eran nuestras porque un mal acuerdo 970 prohibió su uso y le concedió a las transnacionales de la alimentación el privilegio de ser ellas las dueñas de todas las semillas ante lo cual no quedaba otra alternativa, según los secuaces oligarcas, que comprarle a esas transnacionales del crimen las semillas e insumos para cultivar la comida.

Política Antinacional y Antipopular repudiada por los campesinos y la población por ser un crimen cultural. Por algo se ha dicho que el TLC no solamente es que entren productos extranjeros a competir con los nacionales y arruinarlos, ES TODO UN CAMBIO EN NUESTRAS CULTURAS y es sometimiento neocolonial. La libertad de comprar y vender se transforma en esclavitud. Desde esta perspectiva el paro nacional fue también contra las transnacionales y tuvo una connotación libertaria y nacionalista.

Podríamos decir que asistimos a una época de cambios CON EL EMPODERAMIENTO DE MILES DE COMUNIDADES, DE PUEBLOS, REGIONES y PROVINCIAS, EN UNA CONJUNCION DIVERSA DE SUJETOS SOCIO POLITICOS QUE VAMOS TRENZANDO LA NACION PLURIETNICA Y PLURINACIONAL, motivo de nuestras luchas, compromisos y desvelos.

Ojala estas cuartillas aporten un poco en la nunca finalizada acción de reflexión sobre los acontecimientos de agosto del 2013.

M. Chacón

Crisis Agraria en COLOMBIA





El paro agrario que se desarrolló en los meses de agosto y septiembre del 2103 volvió a sacar a flote la problemática agraria de Colombia, que es estructural, que es histórica y que ha marcado muchas de las luchas sociales y de nuestro acontecer en los últimos 100 años.

El paro mostró un nuevo momento o una nueva situación en importantes sectores campesinos y medianos productores agrícolas. Después de más de 20 años de reflujo, de acallamiento, reapareció el campesinado expresándose y exigiendo. Volvió a tener voz gracias a las grandes movilizaciones que se desataron y al estar de nuevo en la lucha.

La lucha del campesinado colombiano fue maniatada y acallada por la represión oficial y el terror paramilitar que se desató en el país desde fines de los 80 del siglo pasado. La violencia ejercida en distintas formas por las clases dominantes, silenció la voz del campesinado, lo borró como sujeto activo y presente en la vida social y política del país y lo arrinconó aún más en la estructura socio-económica. Hasta tal punto que le arrebataron 6 millones de hectáreas y lo dejaron en unas condiciones sociales y económicas más difíciles que las tenían en los 70 y 80.

A las clases dominantes, al capital transnacional, quien decide la vida del país, al modelo imperante, no le interesa la producción campesina, ni el campesino como productor de alimentos. No le interesa la soberanía alimentaria. Quieren las regiones y tierras que aún están en las manos de los productores campesinos para la minería de las multinacionales, las grandes plantaciones de los llamados agro combustibles, los megaproyectos y para otras actividades económicas distintas a la producción alimentaria.

Los alimentos que antes los campesinos producían, ahora llegan mediante las importaciones, de conformidad con el modelo imperante y el rol que le da a Colombia, el sistema capitalista mundial.

Las movilizaciones que se dieron en meses pasados indican que parte de ese campesinado, que fue aplastado por la represión, por el terror paramilitar de las últimas décadas, arrinconado por el modelo imperante, ha logrado expresarse de nuevo. Está consiguiendo romper el miedo. Está logrando recomponer el tejido social y sus procesos organizativos, así sea parcialmente. Está volviendo a ser sujeto de la lucha social, como lo ha sido en otros momentos de nuestra historia. Ha logrado recuperar su voz. Todo esto es significativo y promisorio. Pero aún parcial.

En las grandes jornadas de los meses pasados no participó de manera significativa el campesinado de los departamentos de la costa norte del país. No porque no exista o no tenga este una gran tradición de lucha o porque allí no se presenten graves problemas. No. Simplemente porque aún no logra recuperarse de la contraofensiva paramilitar que se desató en todas esas regiones frente al movimiento campesino que emergió en años 70 y 80, que tuvo gran fuerza y expresión.

En esos territorios el narcoparamilitarismo, fusionado con los grandes terratenientes y el resto de la clase dominantes de la Costa, logró aplastar el movimiento social y político y controlar más que en otras partes del país. Esto aún se mantiene, aunque no tan abiertamente como en el pasado. Es diciente que un individuo como Kiko Gómez, reconocido narcotraficante, paramilitar y responsable vox populi de varios asesinatos desde los años 90, se mantuviese hasta Octubre de este año como gobernador del departamento de La Guajira y como un respetable señor.

La movilización y la lucha del campesinado sacaron nuevamente a flote el problema y la crisis agraria y la impusieron como tema de interés en la opinión. El campesino recuperó su ser como sujeto social y así su voz y su presencia.

Es de esperar que ello siga siendo así dado que se anuncian nuevas movilizaciones para el año que viene y el gobierno no está resolviendo los problemas, no está cumpliendo con los pocos acuerdos que hizo.

Hay buen estado de ánimo en la gente que salió a la lucha en los meses pasados y los procesos organizativos más importantes del sector popular en el agro, siguen avanzando. Nos referimos a las llamadas Dignidades, al Coordinador Nacional Agrario-Congreso de los Pueblos y a la Mesa de Interlocución Agraria-Marcha Patriótica.

Los problemas básicos
Distribución de la tierra

Un aspecto central, estructural, en Colombia ha sido y sigue siendo la desigual distribución de la tierra, la escandalosa concentración de la misma. Lo que es considerado por muchos analistas como una de las causas más importantes del levantamiento armado revolucionario que origina las guerrillas colombianas.

El 77% de la tierra está en manos del 13% de los propietarios. El 80% de los pequeños campesinos son microfundistas, tienen menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF).

"El estudio "Colombia rural, razones para la esperanza", del programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) señala que 52% de la gran propiedad está en manos de 1,15% de la población."(El Espectador. Septiembre 26-2011)



El gran latifundio ganadero, sigue siendo componente determinante de la estructura agraria del país y del poder regional. Los terratenientes tradicionales y los emergentes, son factores de poder decisivos en las regiones y desde ese espacio consiguen gran incidencia en el ámbito nacional. Han levantado un marco de convivencia con los sectores agroindustriales, de la gran minería transnacional, de los megaproyectos y de las dinámicas de la financiarización y están dentro del engranaje dominante global.

Actualmente hay 38 millones de hectáreas ocupadas por la actividad ganadera. Según, Absalón Machado, en el trabajo "Tenencia de tierras, problema agrario y conflicto", " (…) Colombia tiene una estructura productiva con un uso irracional del suelo (…) El país está subutilizando la tierra agrícola en sus ¾ partes, mientras sobre utiliza en ganadería más del 100% de los suelos."

Según los criterios de la ONU, a los ganaderos les correspondería devolver casi 20 millones de hectáreas. "Están usando en pastos 39 millones, cuando el potencial de Colombia para la ganadería extensiva es de 21 millones. Con la agricultura pasa al revés: el país tiene 21 millones de hectáreas aptas para el cultivo, pero solo está usando 4,9 millones." *(Periódico El Tiempo. Septiembre 25 del 2011)*

Con la barbarie paramilitar, La tierra se concentró aún más

La concentración de la tierra, esa desigual distribución, se agudizó aún más en las últimas décadas con la acción paramilitar del Estado y la oligarquía.

Las cifras son contundentes, 5 millones de desplazados y 6 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego, las que ampliaron la concentración y las tierras en manos del latifundio ganadero, del resto de los grandes terratenientes tradicionales o emergentes y de sectores agroindustriales del campo.

Ello responde a la manera de ser y actuar que ha venido configurando la clase dominante y el régimen imperante en Colombia, las que le dan sus propias particularidades en América Latina, al igual que a la lucha que libran los sectores populares.

El académico Renán Vega lo retrata muy bien en una entrevista a www.rebelión.org, "En Colombia se ha consolidado un modelo de capitalismo, un modelo de régimen político muy singular en los últimos 30 años, (…) ese régimen tiene una continuidad lógica, podríamos decir de manera estructural… es una economía profundamente criminal. Es un capitalismo gangsteril. Profundamente sangriento porque la acumulación de capital recurre a la violencia para posibilitar la mezcla de actividades legales e ilegales...Es un elemento estructural en la sociedad colombiana que no es puramente económico, es político-social-cultural y la atraviesa por completo".

Visto todo lo anterior, la deuda histórica de la reforma agraria, sigue vigente. En los últimos 30 años, después de un tímido intento de reforma en los 70, bajo el gobierno de Carlos Lleras, el país ha marchado en sentido contrario a la necesidad histórica de la redistribución de la tierra. Hoy los terratenientes monopolizan más tierras que hace 30 años. En la última década el índice Gini rural, indicador que mide la desigualdad de la propiedad de la tierra, pasó de 0,74 a 0,88

Negación del campesinado Y de la producción de alimentos

El modelo que prima en el país, de subordinación a las multinacionales, de importaciones, de extractivismo, financiarización, relega la producción nacional de alimentos y los importa. Ese el negocio y el interés de un sector de la burguesía, en sintonía con los requerimientos del capital transnacional y del sistema capitalista mundial.

Por tanto tampoco le interesa, ni le da cabida o respaldo al campesinado, quien es el productor básico de alimentos. Estos ahora se importan, desplazando y arruinando la producción campesina del país. Esta situación fue uno de los tantos problemas que se abordaron en las movilizaciones agrarias de agosto y septiembre.

Téngase en cuenta también que en el modelo imperante, la tierra, como fuente de valorización capitalista, ha entrado en otra lógica, en otros usos, en otra destinación: recursos hídricos, minería, biodiversidad, turismo, mega proyectos, infraestructura, recursos energéticos, agro-combustibles, servicios ambientales, frutas y flores de exportación.

Van relegando, arrinconando, extinguiendo la producción campesina de alimentos. Lo que va dejando sin opciones al campesino, lo va expulsando del sistema económico, de su subsistencia y de su reproducción como sector.

Las importaciones de alimentos vienen creciendo de forma sostenida. Solo en 2012 sumaron 9,5 millones de toneladas, esta cifra fue superior en casi un millón de toneladas frente al 2011.

Facilitar la operación Del capital transnacional

La inversión en el campo está en el centro de las apuestas del gobierno actual. Su propósito principal es facilitar las operaciones de las empresas nacionales y extranjeras que pretenden lucrarse explotando los territorios y el trabajo de quienes allí habitan. El interés del gobierno no es propiamente la producción campesina, ni la producción de alimentos. Ese no es su modelo de desarrollo para el campo.

Ahora está planteando que el agronegocio debe ser un motor del crecimiento económico. Pero en su enfoque la pequeña economía campesina no resulta competitiva, ni viable. Por tanto no es de su interés. No hace parte de su visión sobre el desarrollo agrario. Sin embargo a pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de pequeños campesinos.




Colombia
Rebelde

A cambio de la economía campesina, los gobernantes están promoviendo la "integración" entre los pequeños productores con los grandes inversionistas, ya que si los pequeños no son productivos necesitarán el "apoyo" de los grandes inversionistas. Es la asociación o integración entre tigre y burro amarrado. Esa es la nueva asignación que el modelo busca darle al campesino. En esa dirección se orienta el llamado Pacto Nacional Agrario impulsado por el gobierno nacional y los grandes empresarios del sector.

La referencia típica para esa asociatividad la da lo que ha hecho Indupalma. Los campesinos cuidan en su tierra lo que siembra la Empresa que es la palma como insumo para el agrocombustible. Son socios a los que la empresa les presta y les compra y que hoy tienen con ella deudas imposibles de pagar. En la práctica los campesinos operan como trabajadores del proyecto. Pero jurídicamente son socios de la empresa, con lo que esta evade así el pago de garantías laborales y seguridad social.

El Presidente Santos, como respuesta al paro agrario, nombra precisamente como ministro de agricultura, a un señor Lizarralde, anterior gerente de Indupalma y cerebro de esa asociatividad, de esa supuesta reivindicación del campesinado. Ello es indicativo de que tanto, quiere el gobierno dar salidas.

Favorecimiento a las Transnacionales de los alimentos

Otro aspecto clave del desarrollo rural que plantean es la búsqueda del control de semillas por parte de grandes empresas agrícolas. El gobierno nacional ha facilitado este objetivo aprobando varias normas que han vulnerado gravemente los intereses del campesinado.

Normas que son el resultado de la aprobación de Tratados de Libre Comercio que facilitan la apropiación de semillas por grandes empresas. El aprobado con Estados Unidos, tiene una cláusula donde se "consagra la obligación de realizar «todos los esfuerzos razonables» para otorgar protección mediante patentes a plantas".

Propuesta. Componentes De una plataforma de lucha

La reforma agraria, sigue siendo la reclamación central de los pobres del campo, con el ingrediente hoy de la territorialidad, dada la importancia que por distintos factores del modelo y del capitalismo mundial, ha cobrado el concepto y el tema del territorio.

Se busca complementar el acceso a la tierra (reforma agraria) con la permanencia en el entorno productivo y ambiental donde habitan las comunidades. Estas han de tener acceso a la tierra, junto con el control de su agua, sus bosques y sus bienes de la naturaleza. Debe garantizar el entorno productivo y ecológico de las comunidades como base de un ordenamiento territorial democrático.

Nos planteamos, además, un modelo o marco global de políticas, que le de salida y reconocimiento a la producción campesina, a la soberanía alimentaria, a la producción de alimentos y al territorio, que rediseñe la estrategia minero energética que nos han impuesto, atendiendo a la soberanía, el interés de la nación, el beneficio social y redistributivo de la renta minero energética y a la preservación de la naturaleza.

Hablamos también de un Ordenamiento Territorial que redefina la manera como se organiza la producción, como se distribuye el uso del suelo y como se delimitan las regiones en nuestro país. Accediendo a la tierra, se necesita además garantizar el entorno productivo y ecológico de las comunidades para vivir, para generar nuestra producción y para defender los ecosistemas.

Hay que conquistar Territorios Asociativos Campesinos que podrán concretarse a través de diversas figuras, garantizando:

- Reconocimiento del campesinado como sujeto político, económico y cultural.
- Permanencia en el territorio para las comunidades, con garantías para la producción propia y para el despliegue de la riqueza cultural.
- Defensa de la soberanía alimentaria de la nación y las comunidades.
- Regulaciones colectivas del suelo, la propiedad, la producción, la distribución y la circulación de los productos generados por el trabajo campesino.
- Un modelo de buen vivir propio, con base en planes de vida elaborados por las comunidades.

Defendemos una política económica que proteja las actividades del campesinado, los indígenas y las comunidades afro. Consideramos que la economía campesina es eficiente, efectiva, viable y promueve la justicia social. Pero esa economía campesina solo podrá ser viable si se desarrollan políticas de promoción y protección de los pequeños productores.

Por último, hay que pensar también en un sistema nacional ambiental desde los pueblos y las comunidades.

Jorge Mario Castro Mejía

CRISIS AGRICOLA MINERA O ESTRUCTURAL

Es nuestra responsabilidad conocer la historia y la realidad actual para defender nuestros principios de soberanía e independencia junto a las mayorías, la comunidad científica e intelectual, que se han levantado en defensa del bien común y están en su proceso de construir Nación con equidad. El ELN es una organización revolucionaria que el próximo año cumplimos 50 años en lucha de resistencia junto a nuestro pueblo y somos un gran referente de dignidad nacional.

Sobre el tema minero, hemos expresado que Colombia es un país esencialmente Agrícola, antes era el caucho, luego el café, flores y banano, después la coca, ahora la minería. Se le ocurrió al gobierno de Uribe, cuando llevó la narco-república a la constitución del narco-estado en sus dos gobiernos de facto e imponer a espaldas del pueblo: "País minero: 2019", para beneficio e interés de las multinacionales y la mafia, agenciadores de la guerra contrainsurgente y antipopular.

Las cifras muestran que Colombia no es una potencia minera, ni petrolera; el sector minero solo aporta el 2.4% al PIB, entre la minería y petróleo genera cerca de 300.000 puestos de trabajo directos y tres veces más (900.000) si suman los indirectos, cifra que es cerca del 5% de la población ocupada del país (18 millones). Modestamente se ha incrementado la exploración y explotación de lo que se llama "la locomotora" minera, petrolera y del sector eléctrico, con grandes costos ambientales y sociales, que han incrementado el conflicto social y armado favoreciendo los intereses de las Empresas transnacionales y los belicistas.

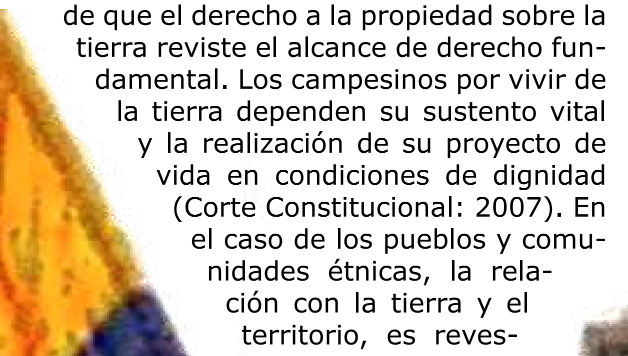
Conflicto por la tierra y los territorios:

El país tiene grandes interrogantes sobre el concepto de soberanía de su territorio. La minería extractiva atenta contra la soberanía, el patrimonio y el buen vivir de todos y todas.



El proceso actual de titularización de bienes agrícolas y recursos naturales en los mercados mundiales de capitales, la adquisición masiva de tierras, el licenciamiento extensivo del subsuelo para la explotación de recursos naturales no renovables, la implantación de modalidades para la mercantilización del uso de la tierra como el derecho real de superficie (DRS) y la apertura a la inversión extranjera, y acaparamiento del uso del suelo y del subsuelo y/o de la propiedad de tierras en países dependientes, por parte de capitales extranjeros y nacionales poderosos, productivos y financieros, es uno de los rasgos distintivos de la globalización capitalista; lo cual genera la lucha popular por la soberanía e independencia.

Las comunidades campesinas, el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, las señala como grupos que merecen especiales garantías y medidas de protección por parte del Estado burgués. En el caso de las comunidades étnicas, la integridad cultural es un interés superior claramente documentado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En ambos casos se plantea la particularidad de que el derecho a la propiedad sobre la tierra reviste el alcance de derecho fundamental. Los campesinos por vivir de la tierra dependen su sustento vital y la realización de su proyecto de vida en condiciones de dignidad (Corte Constitucional: 2007). En el caso de los pueblos y comunidades étnicas, la relación con la tierra y el territorio, es revestida de seguridad jurídica, garantiza la supervivencia social porque la relación con la tierra reviste un carácter espiritual, cultural y colectivo.





Derechos, minería y conflictos

Este modelo es la causa del desplazamiento de personas y de comunidades, vulnerándose sus derechos fundamentales, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en la Guajira y Cesar con el carbón, como casos emblemáticos del país, y que se evidencia con la minería de oro en Santander, Antioquia, Tolima, Caldas, Cauca, Chocó y Córdoba, entre otros departamentos.

La lucha por tenencia de la tierra para los megaproyectos ha dejado más de 6 millones de desarraigados, a punta de masacres, desapariciones, amenazas, torturas. Muchos se han organizado en el MOVIMIENTO DE VICTIMAS CONTRA EL ESTADO -MOVICE-, configurando un nuevo actor social y político en las luchas por la verdad, justicia y reparación, y la restitución de más de 10 millones de hectáreas que les fueron robadas en los últimos 15 años.

Por todo el país se dan jornadas de protestas ambientalistas populares en respuesta a los atropellos. Por ejemplo en el Oriente colombiano, el proyecto minero sobre el páramo de Santurbán, con su lucha



por el agua; la alerta popular en el proyecto minero de la Colosa en Cajamarca (Tolima) y la represa del Quimbo en el Huila.

La gravedad que reviste no realizar consultas previas a comunidades étnicas en relación con proyectos mineros que intervienen en el territorio ancestral o impactan negativamente la vida comunitaria, confinando a la población o impidiendo el acceso a intangibles culturales no territoriales como los lugares sagrados (importantes para la toma de decisiones políticas a la luz de las cosmovisiones propias de cada pueblo), impacta el derecho fundamental al territorio y, por tanto, pone en peligro la supervivencia física y cultural de las comunidades étnicas entendidas como sujetos colectivos.

Los baldíos y su usurpación

La piñata de los baldíos en la Orinoquia que se ha desatado recientemente para la siembra de cultivos de exportación y agrocombustibles, no es ninguna novedad en Colombia, simplemente es la repetición de una vieja historia, que tiene como protagonistas a las clases dominantes de siempre y al Estado. La empresa azucarera Riopaila, se valió de la asesoría de una "prestigiosa" firma de abogados robabaldíos: Brigard & Urrutia, que dirigía Carlos Urrutia, hasta hace pocos meses Embajador de Colombia en los Estados Unidos; así lograron robarse 42.000 hectáreas, con el fin de implementar el Proyecto Veracruz, en el Vichada, destinado a producir caña de azúcar, soja y palma aceitera. Asi mismo, el grupo Sarmiento Angulo, con 17.000 hectáreas y una inversión de cien millones de dólares en palma y caucho. También Alejandro Santo Domingo quien no ha comprado tierras, ha optado por alquilarlas, con 4.000 hectáreas. La familia Eder, dueños del ingenio Manuelita, se ha apoderado de 20.000 hectáreas en el Meta y 10.000 en Casanare, destinadas a palma de aceite y agrocombustibles. El industrial santandereano Jaime Liévano posee 13.000 hectáreas, con una inversión de 100 millones de dólares en Puerto Gaitán, en cultivos de soya y de maíz. Entre los ladrones de cuello blanco están empresarios extranjeros, la firma Timberland Holdings Limited, con 10 predios en La Primavera (Vichada), que abarcan un total de 13 mil hectáreas, mientras la empresa estadounidense Cargill –el principal monopolio mundial de la alimentación- adquirió 52.500 hectáreas, adquisición que también contó con el asesoramiento de Brigard & Urrutia. Hasta el momento, en el Vichada se han ubicado 140 mil hectáreas en situación similar a la de Riopaila.



La feria de los títulos mineros

La implementación del modelo extractivista de los recursos naturales no renovables, impulsado por los últimos gobiernos de turno, se ha concretado en gran medida en la proliferación de títulos mineros y, de manera consecuente, en el incremento de actividades mineras en gran parte del territorio nacional.

Esta situación ha conllevado a que se privilegien estas actividades extractivas por parte de diferentes entidades del Estado sobre otro tipo de actividades productivas, e incluso sobre los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos, lo que ha convertido a la minería en una actividad generadora de conflictos sociales, ambientales, económicos y culturales en varias regiones del territorio nacional.

A pesar de la grave afectación ambiental y social generada por la minería, en Colombia los títulos mineros se otorgan sin ningún tipo de rigor técnico, ni jurídico, basados en el principio de que "quien es primero en el tiempo, es primero en el derecho", es decir, que no existe una cualificación del explotador minero y, por consiguiente, no existe un proceso de selección del mejor postor.

A finales de diciembre de 2012, en Colombia habían sido suscritos 9.400 títulos mineros, cubriendo 5,6 millones de hectáreas. De estos, 3.760 están en explotación y abarcan cerca de 2,1 millones de hectáreas, un área cercana al 1,8 por ciento del territorio nacional.

Se estima que en la actualidad existen más de diecinueve mil (19.000) solicitudes mineras por resolver, que sumados a las otorgadas y a las declaradas áreas estratégicas mineras en el Amazonas (Departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada) y el Pacífico (Departamento de Chocó (Riosucio, Juradó, Carmen del Darién) que, según la Resolución 045 del 20 de junio de 2012 de la Agencia Nacional de Minería, suman una extensión cercana a 22,3 millones de hectáreas, se puede señalar que en el país las áreas con interés minero abarcan cerca de cuarenta (40) millones de hectáreas de las ciento catorce(114) millones de hectáreas que conforman el territorio continental.

Deterioro ambiental

La justicia medioambiental desde los estados burgueses como caso de "justicia compleja"

"El cambio climático es el mayor problema de acción colectiva al que el mundo se ha tenido que enfrentar". En Copenague 2011, el presidente H. Chávez y Evo Morales dijeron: "Cambiemos el modelo, no el clima".

El país cuenta con 34 páramos delimitados, con una superficie total de 1'932.395 hectáreas (ha), lo que equivale a 1.6% del territorio. Sin embargo, solo 709.849 ha se encuentran dentro del sistema nacional de Parques Nacionales Naturales, lo que significa que más de la mitad de páramos del país, 63.2% del total de su área, se encuentra por fuera de la jurisdicción de un Parque Nacional Natural.

Según la evidencia numérica aquellos páramos con mayor área por fuera del Sistema de Parques Nacionales Naturales cuentan con mayor grado de vulnerabilidad ante su explotación económica. De hecho, los distritos de páramo con mayor área por fuera de un Parque Nacional Natural son los que presentan mayores casos de intervención minera. Por ejemplo, aquellos más vulnerables son los de Boyacá con 441.441 ha, los de Cundinamarca con 227.352 ha y los Santanderes con 207.784 ha.

El otorgamiento indiscriminado de títulos mineros y el desarrollo de las actividades mineras, está llevando al país al desconocimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y los convenios internacionales sobre medio ambiente, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES, la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Protocolo de Montreal, el Convenio Marco de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), a través de los cuales el país de comprometió a adoptar medidas tendientes a la conservación ambiental y al uso sostenible de los recursos naturales renovables. No obstante, es cada vez más evidente el daño y la pérdida de biodiversidad (especies y ecosistemas), suelo, agua, paisajes y aire. Según el Instituto Humboldt, Colombia es el cuarto país más rico en biodiversidad en el mundo. Se calcula que el 40 por ciento del país está cubierto por bosques que albergan el 10 por ciento de las especies vivas del mundo.

Las burocráticas autoridades ambientales no cuentan con personal suficiente e idóneo para realizar la evaluación y posterior seguimiento de los proyectos, lo que puede traducirse en qué no se establecen adecuadamente los términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se pueden desarrollar los proyectos. Así mismo, que no se impongan los límites y condiciones necesarias para evitar impactos ambientales más allá de lo previsto e incluso la generación de daños y pasivos ambientales y sociales, que en muchos casos terminan asumiendo el Estado y los habitantes de las zonas afectadas.

Fracaso del TLC:

El gobierno actual impuso de manera intolerante y excluyente el TLC, sin escuchar y analizar de manera consensuada las repercusiones del TLC con los EEUU, con la UE; ¿por qué no se ha hecho ningún debate nacional popular, ni consulta?. Las nuevas y grandes jornadas de protestas lideradas por todas las organizaciones sociales movilizadas como en el Catatumbo, Dignidad cafetera, los paperos, lecheros, cebolleros, mineros, comunidades ancestrales, incluso sectores medios como los emputados, los estudiantes junto a la MANE, los profesores y tra-

bajadores de la salud lo han evidenciado, que la crisis es estructural. Lo que más ha indignado es el abandono estatal por la corrupción, el engaño e incumplimiento a los acuerdos pactados, las amenazas y represión, que despertaron gran solidaridad de clase en todo el país.

La alta competitividad desigual de mercados generado por las empresas transnacionales es la causa fundamental de la quiebra de la pequeña empresa nacional, y de toda la crisis del agro; no se concibe que tengamos que estar importando toneladas de alimentos transgénicos para nuestra sobrevivencia, siendo un país agrícola y que nuestros productos no salgan al mercado porque los importados son impuestos por los acuerdos del TLC a menos precio, pero con graves daños a la salud y preservación de nuestra especie.

Es muy cínica la reglamentación del gobierno al tener que imponer a nuestra comunidad campesina que deba comprar semillas certificadas de las empresas transnacionales y que sea prohibida la semilla nacional. Estamos comiendo arepa con maíz de otros países y lo mismo la papa, el sancocho ya no es nacional; de la misma manera la ropa y enseres de la casa.

Hay otros problemas más serios; el país no tiene la infraestructura para garantizar la viabilidad de la "locomotora", el transporte y salida de esa producción; de ahí, el desespero por construir y arreglar las carreteras, los terminales en puertos, aeropuertos, ampliación y construcción de nuevos oleoductos.

Violación de los Derechos Humanos

Colombia es un país donde el sector rural es escenario de múltiples confrontaciones y disputas violentas inherentes a un conflicto armado prolongado de carácter histórico y diverso; donde la vida comunitaria se ha visto reprimida por el actuar de estructuras estatales y paraestatales que cometen graves violaciones a los derechos humanos y que operan desde una lógica paramilitar, llamadas ahora Bacrim, con el ejercicio de poder fáctico en territorios específicos. Del mismo modo, el actuar complejo del conflicto y la respuesta militar estatal no sólo colocan a las comunidades en un plano de vulnerabilidad humanitaria sino que ponen en entredicho la capacidad del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos por parte de las comunidades.

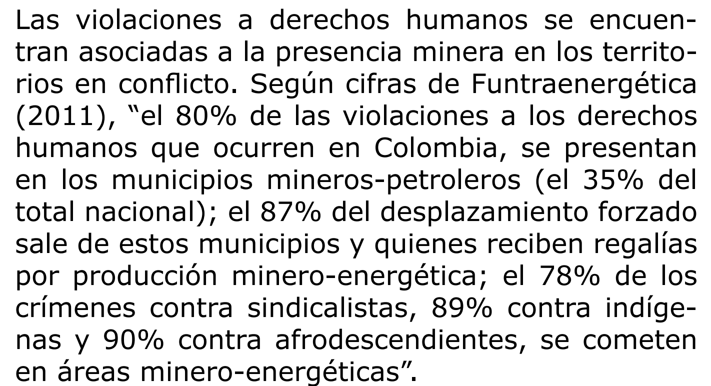
La Corte Constitucional ha establecido que el conflicto armado colombiano debe ser entendido en sentido histórico y amplio. Lo anterior quiere decir que el conflicto no es solamente bélico sino también de carácter social e involucra una serie de intervenciones territoriales que guardan una relación de funcionalidad de estructuras paraestatales que cometen violaciones graves a los derechos humanos con carácter masivo y sistemático.

Un estudio de la zona de influencia de Cerrejón (La Guajira), el área de mayor producción de carbón del país, concluye que "los resultados muestran una población en condiciones críticas de pobreza, medida tanto a través de acceso a bienes y servicios como mediante el índice de oportunidades humanas"; y desde el punto de vista de la salud "los resultados presentan vulnerabilidad y baja cobertura efectiva de servicios con limitada respuesta institucional".



Los municipios productores de oro en Antioquia se registran anualmente 96 muertes violentas por cada cien mil habitantes, 28 muertes de niños por cada mil nacidos vivos, 48% de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y 22% de la población en condiciones de miseria.

El municipio de Montelíbano (Córdoba), único productor de níquel del país, se registran 79 muertes violentas al año por cada cien mil habitantes, 41 niños muertos por cada mil niños nacidos vivos, 45% de la población con NBI y 18% en condiciones de miseria.





Esta co-responsabilidad social de las empresas tiene como premisa mayor el postulado según el cual nadie (en este caso las comunidades intervenidas por las actividades de exploración y extracción) tiene por qué correr más riesgos que los demás, y más aún, nadie tiene porqué sufrir daños sin que los agentes que usufructúan el daño reparen a estas personas y comunidades. En este sentido, las empresas mineras junto con el Estado comparten una responsabilidad inherente a la posición de garantes que tienen frente a las comunidades por asumir una actividad riesgosa de carácter humanitario, y ser co-generadores del riesgo humanitario.

Las violaciones a derechos humanos se encuentran asociadas a la presencia minera en los territorios en conflicto. Según cifras de Funtraenergética (2011), "el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios mineros-petroleros (el 35% del total nacional); el 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios y quienes reciben regalías por producción minero-energética; el 78% de los crímenes contra sindicalistas, 89% contra indígenas y 90% contra afrodescendientes, se cometen en áreas minero-energéticas".

Se trata de 21 municipios que para 2010 equivalen a una tercera parte del territorio en proceso del plan de consolidación del gobierno, donde en forma paralela persisten, según Codhes (2011), múltiples formas de violencia política y social y graves violaciones a los derechos humanos y existen "minas de carbón, oro, plata, platino, ferroníquel, metales preciosos, materiales de construcción, caliza, arcilla, roca fosfórica y otros que se explotan, bien sea con importante inversión nacional o extranjera o de manera artesanal": Montelíbano, Santa Marta, Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, San Jacinto, El Tambo, Santander de Quilichao, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Balboa, El Tambo, Istmina, Sipí, Barbacoas, Samaniego, Tibú, Chaparral y Buenaventura.

En el caso específico colombiano, las comunidades rurales (en especial, campesinas, indígenas y afrodescendientes) se han caracterizado por expresar formas de movilización social encaminadas a obtener procesos descentralizados e incluso autosostenidos de democratización o autogestión. Las demandas de democratización política, a su vez, pueden expresarse como una de las razones por las cuales proyectos como el narco-paramilitar victimizan a las comunidades.

Solo enunciamos las grandes corrupciones administrativas y la impunidad sistemática de los sucesivos gobiernos; el abandono estatal de las inversiones sociales, el incremento desmesurado de la militarización y represión; la exclusión política y las desigualdades de las mayorías como causas del hambre y miseria, que son la esencia del conflicto social y armado que vive el país.

Conclusiones y recomendaciones

El modelo neoliberal impuesto por los países imperialistas a nuestro país, bajo la complacencia de las clases gobernantes, es una de las causas fundamentales para generar la violencia social y política.

La lucha de las organizaciones sociales y políticas como nuevos sujetos activos han protagonizado la exigencia de los cambios estructurales que el país necesita para el logro de la democracia participativa y directa en la construcción de la Paz con justicia social. En esa confrontación y lucha es que varias empresas transnacionales han tenido que salir del país o están cuestionadas por el daño social y ambiental, como Vale (de capital brasilero), la multinacional minera Braewal Mining Corporation (Capital canadiense); Chiquita Brand (capital gringo), la Greyestar (canadiense), Anglo Golg Ashanti (inglesa y sudafricana), entre otras.

En términos generales, se puede señalar que las actividades mineras se están desarrollando en el país sin garantizar el derecho fundamental a la par-



ticipación comunitaria, así como la de otras entidades del Estado, especialmente en el orden regional y local, desconociendo sus intereses y necesidades. Por regla general, las actividades mineras están vulnerando derechos fundamentales y colectivos, desconociendo procesos locales (ambientales, territoriales, sociales y económicos).

La comunidad debe tener una participación activa y efectiva en las decisiones de las ventajas y desventajas de los proyectos. La consulta jamás puede ser la única comunicación del estado y la comunidad. Por eso, es que el Ministro del Interior carece de los mecanismos para hacer la propuesta y reglamentarla. Socializar y discutir popularmente sobre el aumento a las multas, que duelan, y controles ambientales a las empresas transnacionales; investigar y sancionar a las que violen los Derechos Humanos.

Exigir las pólizas minero-ambientales con el alcance previsto en el nuevo Código de Minas, para que se garantice el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, lo cual debe conllevar a una situación de protección y el cumplimiento de las obligaciones ambientales, especialmente al momento del cierre minero. En materia ambiental debe existir un mecanismo idóneo que garantice el cumplimiento efectivo por parte de las empresas de los términos, condiciones y obligaciones previstos en las licencias ambientales.

El Nuevo Código de Minas elaborado de manera popular debe incluir cambios significativos con respecto al medio ambiente, como la prohibición de actividades mineras en páramos, humedales y zonas protegidas, las mismas que ya han generado molestias entre empresarios e inversionistas del sector.

El ELN ha manifestado que estamos contra la gran minería de las multinacionales, y defendemos la pequeña minería artesanal que tiende hacer más ecológica; que debemos priorizar el interes económico nacional y popular, que beneficie a las mayorías nacionales y no al capital extranjero que lo único que le interesa es el saqueo de nuestros recursos y la acumulación de capital. Defendamos la dignidad y soberanía nacional; mediante la protesta y organización, impulsemos la economía nacional y popular para el grueso de la población colombiana y la conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente.

El ELN ha sido consecuente con buscar un acuerdo y consenso nacional sobre la legislación popular de los recursos estratégicos, para lo cual se necesita la revisión de los contratos de concesión y asociación con todas las empresas transnacionales, una legislación hoy viciada de narcopolítica y sometida a las migajas burocráticas y corrupción de las regalías que dejan las empresas transnacionales y el inmenso deterioro ambiental.

Se necesita hacer una planeación donde se garantice el uso racional de los recursos y una reserva estratégica, Ampliar la capacidad de refinación para el consumo interno. Implementar la escuela e industria petroquímica para la capacitación de técnicos nacionales para el uso de nuestra propia tecnología. Tenemos reservas estratégicas de carbón para construir termoeléctricas, lo mismo gas natural para generar energía y evitar el deterioro ambiental de las hidroeléctricas que son costosas y son dueñas las empresas transnacionales.

El ELN considera que el país está en un alto nivel de polarización política, social, económica, cultural y jurídica dentro de un crónico conflicto armado, donde se hace necesario el ejercicio de la democracia directa y participativa del país; se construya escenarios de consenso y acuerdos a nivel nacional, con el acompañamiento internacional en la búsqueda de la Paz con justicia social; especialmente en el continente a través de Unasur y CELAC, para que se planteen y analicen estos problemas estratégicos que son la base del bienestar y la paz de nuestro territorio.

El ELN lucha por garantizar que el país pueda elaborar de manera popular unas Políticas Públicas Integrales, para elevar el nivel de vida de los colombianos y colombianas si queremos en verdad crear las condiciones para construir la Paz duradera y un país para todos y todas.

Rubén Vásquez

La Feria de los Recursos Naturales: El Juicio a Pacific Rubiales

"El mundo no debe ser gobernado por transnacionales ni poderes financieros"
Presidente de Uruguay, Jose "Pepe" Mujica. Discurso ante ONU 2013



Un poco de historia

Luego del desarrollo del capitalismo industrial, el cual estaba dedicado a importación de materias primas desde las periferias para la producción industrial en las metrópolis y a la exportación de productos manufacturados. En esa lógica de articulación del sistema-mundo capitalista, viene la configuración de las grandes empresas, que van experimentando cómo su tamaño y poder aumenta, transcendiendo las fronteras del país de origen, transacionalizando la producción, globalizando el capitalismo y sus lógicas de explotación y saqueo por todo el planeta.

Luego de la Segunda Guerra Mundial se inicia la estructuración de todo el andamiaje que se nos ha impuesto hasta la actualidad, con la creciente participación internacional de las empresas básicamente de las metrópolis incorporando los servicios y las finanzas a sus actividades económicas.

Las transnacionales se empiezan a mover por la lógica de la maximización de beneficios en el mínimo tiempo posible. La progresiva globalización capitalista, que desnacionaliza cada vez más a los procesos de acumulación, les sirve para poder expandirse por todo el planeta, obtener recursos naturales de los lugares donde son más baratos, instalar las fábricas en los países que ofrecen las menores obligaciones laborales y ambientales y vender los productos y servicios en todo el mundo.

El aumento de su influencia política ha ido en relación a su potencia económica. Progresivamente han dedicado parte significativa de sus recursos económicos a promover gobiernos, poderes legis-





lativos y judiciales favorables, con un trabajo de presión (lobby), y a mantener una imagen pública favorable.

Actualmente de las 100 economías más importantes del mundo, 51 son estados y 49 empresas. Y por ejemplo las ventas de las 15 transnacionales españolas más importantes son superiores a la suma del PIB de Bolivia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Chile.

La explotación económica transnacional a partir de los años 80, se caracteriza por ser una economía altamente dependiente de los mercados financieros internacionales. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han funcionado como legitimadores de la explotación de las materias primas, del saqueo y el endeudamiento de las naciones del tercer mundo.

De la invasión al Saqueo

A los países latinoamericanos se les impuso la desregularización y la privatización de sus economías, forzándoles a abrir sus mercados al exterior, posibilitando así la llegada de cada vez mayor inversión extranjera directa.

Las multinacionales españolas, canadienses y norteamericanas, que encarnan una especie de "nuevos conquistadores", lideran el gran abanico de conflictos y desastres ambientales en suelo nuestramericano.

El periodo neoliberal de expansión de las multinacionales en el continente, que precedió este nuevo momento histórico que viven nuestros pueblos, ha desmembrado a los estados nacionales y logrado el control de las economías de Nuestra América, contribuyendo al incremento de la integración de nuestros países en las cadenas productivas y financieras del capitalismo mundial.

En ese proceso contradictorio han surgido estructuras como la Alianza del Pacifico, que se enfrenta al ALBA, CELAC y MERCOSUR y otros mecanismos de integración, que son resultado de los proyectos democráticos y populares en curso.

Los pueblos originarios se encuentran entre los sectores más perjudicados por las compañías internacionales. Se trata de poblaciones vulnerables que han sufrido el exterminio, la marginación histórica y una privación generalizada de sus derechos. En general, sus sistemas sociales y económicos y sus formas ancestrales de relacionarse con los territorios han sido suprimidos en beneficio de otros sistemas foráneos y enfocados principalmente a la explotación de sus recursos. Desde los tiempos de la conquista, han sufrido desplazamientos, expulsados de sus tierras, sometidos a extorsiones y privados de las indemnizaciones legítimas.

Colombia en la telaraña de la explotación

Colombia no ha estado exenta de todas las nefastas consecuencias que han producido el capitalismo y el despojo por cuenta de la acción de las empresas multinacionales en cada uno de los territorios. Además de la destrucción ambiental y de los ecosistemas, el terror laboral y las mentiras corporativas, las empresas multinacionales en Colombia se han comprometido en actos criminales, y en el patrocinio y financiación de los grupos paramilitares que han sometido a nuestro pueblo con el asesinato, la tortura y el desplazamiento de millones de campesinos y trabajadores.

Además de la gran feria de los títulos mineros que ha impulsado el gobierno desde su locomotora minero-energética, se le han concedido importantes concesiones a dos empresas multinacionales Pacific Rubiales y Anglo Gold Ashanti. Cabe señalar que la primera empresa, de origen canadiense, tiene la tarea crucial de desarrollar la extracción de una cuarta parte del petróleo que exporta el país.

Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, se ha convertido en uno de los municipios que más regalías recibe. Sin embargo, este rico rincón de la patria padece los embates de la desigualdad así como el resto de la patria colombiana. Con 17.310 habitantes, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas ronda el 70% y la tasa de mortalidad infantil era la más alta del departamento hasta el 2007. Tiene agua solo dos horas al día, la corriente eléctrica es intermitente y el 45% de la población vive en la miseria.

El 43 % de la población de Puerto Gaitán es indígena; allí se encuentran los indígenas sikuanis, a quienes se les ha arrebatado el territorio que requieren para la caza, la pesca y la recolección. La explotación petrolera se ha convertido en una amenaza social, ambiental, económica, política y demográfica de gran magnitud.

La Pacific Rubiales, lejos de ser la entidad que representa a Colombia (como ha sido promovida por una enorme campaña de medios para limpiar su imagen), ha sido denunciada por maltrato y la superexplotación a la que somete a sus trabajadores, contando con todo el respaldo del Estado colombiano, que le proporciona organismos represivos (policía y ejército) para atenazar a quienes se atrevan a protestar contra esta empresa y sus lesivos intereses.



Los impactos en nuestros pueblos

La inversión extranjera directa no solo es fuente de beneficio a sus dueños y algunos pocos sectores de la población que la recibe, sino que a menudo es fuente de agresión, conflicto y violación a los derechos humanos más elementales. En consecuencia, desde la llegada de la explotación neoliberal a través de las empresas multinacionales a los territorios nuestramericanos, interactúan actores nacionales y trasnacionales que se caracterizan por la explotación y la violencia.

De los múltiples impactos producidos por las trasnacionales, los de mayor repercusión son:

1. En el terreno económico la adquisición por parte de grandes empresas de empresas públicas latinoamericanas, ha traído como consecuencia directa la mercantilización de servicios públicos básicos. La privatización de la electricidad, las telecomunicaciones y el agua, ha priorizado al lucro de unas corporaciones por encima del al derecho social a garantizar un servicio básico.
2. En el terreno social, el impacto sobre los trabajadores, comunidades y finalmente sobre los usuarios ha sido profundo. Más allá de generar puestos de trabajo de alta cualificación desplaza la mano de obra de los territorios locales. Lo que omiten los informes de gestión de estas empresas es la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo tras la privatización y ajuste de las plantillas, tanto en España como en América Latina.



3. En el terreno político, el posicionamiento de las multinacionales en el contexto de las democracias burguesas ha devenido en el apoyo de éstas a los regímenes represivos para operar con mayor facilidad y obtener mayores ganancias. La entrega de la patria colombiana a las multinacionales ha significado su participación en la financiación, organización y patrocinio del paramilitarismo, en alianza directa con sectores de las Fuerzas Armadas. Coca-cola, Nestlé, Chiquita Brands y British Petroleum son los ejemplos más emblemáticos de esta práctica.

El terrorismo de Estado ha sido potenciado por la acción y la apología del gobierno actual de Juan Manuel Santos a la inversión extranjera. La llamada "prosperidad democrática" del régimen no es más que la entrega del patrimonio nacional a las empresas multinacionales que, junto a las clases dominantes, pretenden convertir al país a la vez en un enclave económico neo-colonial y en un cementerio; y para lograrlo es necesario preservar el terrorismo estatal y paraestatal asegurando su porvenir.

Pese a la inmensa riqueza que posee Colombia, las grandes mayorías sufren hambre y desnutrición. Según la CEPAL, más del 49.2% de la población de Colombia vive bajo la línea de pobreza y el 14.7% en indigencia. Las cifras de los niños víctimas de la pobreza en Colombia son escalofriantes: 45% de ellos son pobres y 17% indigentes. En Colombia mueren anualmente 20.000 niños menores de 5 años por causa de falta de agua potable, víctimas de la guerra económica declarada por la oligarquía y las multinacionales contra el pueblo colombiano. En este contexto de expolio y empobrecimiento, el Estado se erige como garante de los intereses económicos de la oligarquía y de las multinacionales. Las torturas, desapariciones, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, fumigaciones, bombardeos, montajes judiciales, montajes mediáticos, etc. son todos elementos funcionales a la acumulación capitalista transnacional.

Pacific Rubiales a Juicio

La lucha social y la movilización política en la Colombia de hoy ha comportado un interesante avance y crecimiento que expresa el desgaste en la gobernabilidad del régimen santista y la urgencia de que las mayorías nacionales sean escuchadas y atendidas en la búsqueda de los caminos hacia una nación más justa, equitativa, democrática y en paz.

La lucha y resistencia del pueblo colombiano ha elevado los niveles de conciencia social y articulación para la movilización. Los recientes levantamientos de campesinos, camioneros, mineros, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, trabajadores de salud y maestros demuestran el descontento generalizado por el modelo económico impuesto por el gobierno que legitiman el despojo y la explotación por parte de las empresas multinacionales en el suelo nacional.

La política de despojo promovida por la locomotora minero-energética promueve la entrega del patrimonio y la golpeada soberanía a las multinacionales del gran capital, al igual que hizo el gobierno de Uribe Vélez.

Sin embargo, los movimientos sociales, las comunidades en resistencia y el pueblo en sus diversas expresiones han adelantado importantes acciones de lucha contra las políticas del establecimiento y la legitimación del despojo. Ejemplo de ello han sido los Tribunales Permanentes de los Pueblos (TPP) como un escenario de opinión para condenar los crímenes cometidos por las grandes corporaciones contra los pueblos, donde surge el juicio ético y político contra el despojo y sus impactos en el pueblo, el territorio y el ecosistema nacional.

El juicio ético y político realizado contra la multinacional canadiense Pacific Rubiales en el municipio petrolero y combativo de Puerto Gaitán (Meta) demostró una vez más ante los ojos del país y el mundo la voracidad del capitalismo trasnacional, las violaciones a las leyes nacionales y la vulnerabilidad en que se pone a las etnias indígenas, los trabajadores, a través de la criminalización de la protesta social y la destrucción del medio ambiente de esta rica región de nuestra patria.

La contundente jornada que convoco a más de 600 líderes pertenecientes a diferentes organizaciones sociales y populares (indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles, etc.) de los departamentos del Meta, Casanare, Boyacá, Arauca, Cundinamarca, Guaviare y Santander, juzgó a la empresa canadiense por sus prácticas en el departamento del Meta, donde se produce el 47.1%.de crudo del país. Las pruebas contra Pacific Rubiales expuestas en el Tribunal desnudaron la actuación de la empresa canadiense de manera irrefutable.

Pacific Rubiales y su catastrófico desempeño contra el interés nacional ha sido amparado por un gobierno que representa cada vez más los intereses a las empresas multinacionales dándole continuidad a tantos años de entreguismo y saqueo.

La lucha sostenida contra el despojo que pone en la feria pública las riquezas naturales con los que aun cuenta la patria es el camino. Ya son cientos de comunidades que luchan y se organizan contra las transnacionales, contra las medidas gubernamentales y contra la represión. Nuestro pueblo organizado lo sabe y cada vez más, se enfrenta a la locomotora minero-energética con que Santos quiere arrasar el territorio y la gente.

De Pie Colombia, la lucha continúa



Paula Elena Velasco V.

Como Bolívar nos Enseñó

Solo la unidad de nuestros pueblos combatientes nos daran la independencia y la libertad



"(...) desde el momento en que hay una relación de poder, hay una posibilidad de resistencia. Jamás caemos en la trampa del poder: su influjo siempre puede modificarse, en condiciones determinadas y de acuerdo con una estrategia precisa. (...) "

Michel Foucault

En Nuestra América con la invasión española, la conquista y la colonia, la lucha y resistencia por libertad y autodeterminación de los pueblos se desencadenó y se profundiza hoy, en pleno siglo XXI.

Al momento de la brega independentista bolivariana, ya existían importantes antecedentes de revuelta contra los imperios de la época, como la rebelión de los Comuneros de Colombia y Venezuela en 1781, el levantamiento de Túpac Amaru en 1780, importantes insurrecciones de esclavos negros, la primera revolución independentista exitosa en Haití (1804), todas ella producto de una "larga crisis colonial y de una creciente toma de conciencia de los pueblos latinoamericanos respecto de su destino histórico" (Jorge Núñez), que dejo el favorable rédito de la primera independencia de nuestras naciones.

Nuestra América, para infortunio de los pueblos, se ha ido construyendo sobre la sangre de miles de hombres y mujeres, que han abonado con ella el territorio que nos pertenece.

Estas gestas emancipadoras han dejado huellas que hoy hacen parte de nuestro acervo –acumulado histórico- que enriquece y fortalece nuestra lucha, pensamiento y utopía del presente y nos lanzan en pos de un futuro socialista para la región y el mundo.

"(…) La invasión europea, iniciada en 1492, incorpora el continente americano a una formación económica-social capitalista como apéndice colonial. Mediante el aplastamiento de las sociedades autóctonas, poseedoras de sus propios saberes y cosmovisiones, entre los que se destaca el desarrollo económico, científico y cultural de los aztecas, los mayas, los incas y otros pueblos, España y Portugal impusieron las divisiones territoriales y las estructuras de gobierno colonial que cada una de estas potencias consideraron más funcional a sus respectivos intereses." (Roberto Regalado)

Ayer como hoy Nuestra América ha estado signada por la voracidad y barbarie de los imperios de turno, europeos o estadounidense, y por las luchas de emancipación de los pueblos para recobrar su soberanía y autodeterminación.

Tan lejos de Dios y Tan cerca de los Estados Unidos

Desde su independencia en 1776, EE.UU desata en el continente su doctrina del "destino manifiesto", mediante el despojo de los pueblos y la anexión de territorios. A partir de allí se inicia la resistencia nuestramericana y aunque el principal recurso para dominar nuestro continente fue la fuerza, a partir de finales del siglo XIX inician la construcción del Sistema Interamericano o Panamericano (TIAR, OEA, JID, BID), legalizando su dominación con la complicidad de gobiernos latinoamericanos y caribeños.

"(..) El largo siglo XX estuvo caracterizado por la expansión de Estados Unidos y por su consolidación como la mayor potencia mundial, punta de lanza del sistema-mundo capitalista. El american way of life se fue implantando tanto como el cristianismo en los tiempos de la Colonia, modificando las formas y las concepciones pero manteniendo la política de exterminio como estandarte hasta llegar al momento actual, el del cambio de milenio, en que, experimentamos una nueva ofensiva imperial mientras, simultáneamente, se levanta una nueva oleada emancipatoria." (Hugo Moldiz).

El imperialismo de los EE.UU avanza en pleno siglo XXI sobre Nuestramérica para apropiarse de los mercados y de los recursos naturales no renovables indispensables para su sostenimiento y aumento de la ganancia, en defensa de los intereses de sus grandes empresas transnacionales e imponer su sistema político y económico, para lo cual ha diseñado un esquema de dominación neo-colonial que está esencialmente garantizado por la militarización de la región y la anuencia de gobiernos y oligarquías cipayas criollas.

Al igual que en el pasado, las crisis cíclicas del capitalismo, alertan y despiertan los pueblos, por las consecuencias nefastas que estas generan en ellos. Nuestra América vive hoy, con inusitada fuerza, su tercera ola emancipadora. De la rebelión y la resistencia a la invasión, el colonialismo y el neocolonialismo, se transita a lo largo de estos años hacia la lucha por el socialismo y, ante la evidencia de la catástrofe ambiental, a la reivindicación de la Pachamama. La lucha contra la enajenación del trabajo es una misma.

Cuba y Venezuela, Dos grandes alientos

Dos hitos marcan la historia de la lucha de los pueblos nuestramericanos, por su soberanía, autodeterminación y revolución continental en el siglo XX, hasta nuestros días: El triunfo de la Revolución Cubana y el avance del proceso Bolivariano en Venezuela.



Los años siguientes a la Revolución Cubana, se caracterizaron por un lado, por la intensificación de las dictaduras militares "de seguridad nacional" con su violencia contrainsurgente y por el otro, como reacción contra éstas y a gobiernos civiles autoritarios, un repunte de la lucha armada revolucionaria en el continente. Época del nacimiento o resurgimiento de las guerrillas en Nicaragua, Guatemala, Argentina, Brasil, Colombia, México, Puerto Rico, entre otros.

Ya a finales del siglo pasado, la llegada a la presidencia de Venezuela del Comandante Hugo Chávez, marca un momento importante donde se ha configurado un nuevo escenario y territorio político, caracterizado por la existencia de gobiernos revolucionarios, progresistas y nacional-populares que rescatan la soberanía y el control de sus recursos básicos, intentando establecer alternativas a la concentración y transnacionalización de la riqueza, la masificación de la pobreza de sus pueblos y la exclusión social resultantes de la barbarie neoliberal, generando además, construcciones integracionistas que constituyen una nueva institucionalidad internacional. Siendo los movimientos sociales los grandes sujetos de estos cambios.

Esta contienda popular, que hoy ínsurge por toda la región busca definiciones tácticas para que los caminos a recorrer conlleven a los propósitos emancipatorios. Los pueblos organizados vamos entendiendo que, no es exitosa una lucha popular anti-imperialista sino es portadora de la lucha frontal contra el capitalismo, el neo-colonialismo y el patriarcado.

"El capitalismo del sur, el capitalismo andino, el capitalismo asiático y cualquier otro que las ilusiones desarrollistas pretendan construir como entidad con vida propia es una ficción. Resolver las contradicciones del capitalismo supone trascenderlo, no darle otra imagen, ni sucumbir ante la seducción de un juego de fuerzas que efectivamente existe y permite reacomodos dentro de ciertos márgenes, pero sin modificar las reglas que intrínsecamente portan esas contradicciones". Ana Esther Ceceña



Los movimientos sociales Articulando para vencer

En este nuevo escenario, la existencia de movimientos sociales que ganan protagonismo en la decisión de trazar soberanamente el destino de la patria, es el punto sui géneris de los cambios radicales de las utopías populares.

Se van logrando avances significativos en la construcción de identidades más concientes -que en los espacios de gobierno-, como el anti-imperialismo, anti-capitalismo, anti-colonialismo y anti-patriarcalismo, la necesaria revolución continental, la segunda independencia y un nuevo orden internacional basado en la multipolaridad.

Al igual que en el mundo entero, los movimientos sociales de Nuestramérica vienen consolidando su unidad en la lucha por la autodeterminación en contra del capitalismo depredador que ha puesto en riesgo con su modelo neoliberal, a la naturaleza y a la humanidad, y van configurando, en identidad con gobiernos de algunos países, procesos alternativos, aún no suficientes, en lo económico, político, social, y en lo ideológico-cultural.



La reactivación de la lucha popular en países como Colombia, Chile, Perú, México, recreando formas de lucha, en la toma de calles, de carreteras, de concentraciones multitudinarias, que han logrado arrebatar banderas a los gobiernos pro-yanquis, es otro hito del momento.

Uno de los fundamentos esenciales en el trasegar de los movimientos sociales, ha sido, asumir como premisa fundamental, la organización y articulación endógena como elemento esencial para mantener lo construido en los países donde se avanza en modelos alternativos, y alcanzar niveles de coordinación continental, donde pueblos organizados y articulados regional o continentalmente, blinden las nuevas construcciones levantadas de manera soberana, a la vez que nutran y se hermanen con las luchas de los pueblos que aún nos batimos contra gobiernos y oligarquías neoliberales pro-imperialistas.

La responsabilidad histórica que hoy recae sobre los movimientos sociales por la magnitud del enemigo que se confronta y la vida que se defiende, hace necesario, en la diversidad de su composición, avanzar aún más, generando movimiento político en cada nación, que vaya cimentando las bases de la auténtica articulación de los pueblos de nuestra región, con una conducción estratégica que avance por una nueva hegemonía anticapitalista, Emir Sader plantea que un proyecto de reformas profundas de la sociedad "sin que desemboque en la alteración de las relaciones de poder, no conduce a ningún proceso real de transformación de la sociedad latinoamericana."

La Patria es América

Así como la integración se entendió como condición necesaria de la independencia, hoy se asume como acción sine qua non estratégica para constituir la Patria Grande, como base irrefutable para concretar la Revolución Continental que imponga al mundo nuestra condición de región libre, en paz, soberana y autónoma para forjar nuestro destino hacia una patria socialista.

El carácter continental de la primera independencia lo encontramos en las primeras juntas de gobierno, de Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Quito, Chile y Paraguay, que invocaron la unidad continental. Cómo no resaltar el Congreso de Panamá (1824) en su significado y la participación protagónica de Bolívar, en el Congreso se materializa la vieja idea del Congreso continental, sostenida por Miranda en 1809 y por la gran mayoría de los líderes independentistas.

Con el advenimiento de un nuevo aire, la integración comienza a retomar la importancia que tuvo en otros momentos y que se perdió en los tiempos del predominio del neoliberalismo y del llamado Consenso de Washington. Hoy resurgen con fuerza la figura y el ideario de Simón Bolívar, San Martín, Artigas, Martí, el Che, Sandino, Mariátegui y Fidel entre otros. Sueño refrescado, enriquecido y protagonizado en los últimos años del siglo XXI por el Comandante Hugo Chávez Frías.

El proyecto nuestramericano de unidad continental, de construir la "Patria Grande", va caminando, se va forjando… El Imperio, y algunos gobiernos y oligarcas de la región siguen movilizándose de modo integral, en contra de la reorganización de las fuerzas populares y el surgimiento de nuevos proyectos autónomos de integración.

"Los procesos de integración en América Latina que paulatinamente se vienen consolidando como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) afrontan la permanente amenaza de gobiernos lacayos de la región como los de México, Colombia y Chile, que intentan convertirse en caballo de Troya y de esta manera ser funcionales a los intereses hegemónicos de Estados Unidos" A. Borón

A los proyectos de Bolívar de independizar a Cuba y Puerto Rico se opuso la Doctrina del Destino Manifiesto, a Nuestra America se contrapuso la Doctrina Monroe, envuelta en el Panamericanismo que diluyó nuestra primera independencia; hoy al MERCOSUR y la ALBA, el intento del ALCA y los numerosos TLC existentes; a la Integración Bolivariana Nuestra Americana, La Alianza Pacífico. El imperialismo intenta imponer de una u otra manera sus intereses.

Unidad, Unidad, Unidad

En este pulso, en franca lid, en 2004 el comandante Fidel Castro y el presidente Hugo Chávez lanzan el proyecto contra-hegemónico: LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMERICA.

Desde su lanzamiento, desde la ALBA, convergente al fortalecimiento de los espacios gubernamentales e institucionales, se viene trabajando por una auténtica participación de las expresiones sociales de los pueblos de la región en el espacio del Movimiento Sociales hacia el Alba.

En el desarrollo de "(…) este propósito de articulación entre los pueblos, del 16 al 20 de mayo, Brasil, 22 países se dieron cita para constituir la I Asamblea Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA… ondeando las mismas banderas de lucha y los mismos sueños por una verdadera transformación social. La integración se inicia desde el encuentro de estos movimientos para superar sus propias fronteras y reconocerse en el otro en una lucha común: Nuestra América." (…) I Asamblea de Movimientos Sociales hacia el ALBA.

El ex-presidente Luiz Inácio Lula Da Silva en marzo 2013 declaró: "Ha llegado la hora tanto de elaborar un pensamiento estratégico de la integración latinoamericana y caribeña que contribuya a consolidar los logros alcanzados en los procesos integracionistas y a trazar pistas para superarlos, como de ampliar y hacer efectiva en ellos la participación de la sociedad y los movimientos organizados", directriz que se comparte y consideramos urgente.

Aportamos con el pensamiento de nuestro Comandante Pablo Beltrán quien nos señala que "El futuro de los cambios y transformaciones continentales está en la unidad popular y revolucionaria, en la participación masiva del pueblo, en la concientización y capacitación generalizada y en ser precavidos desde ya, para organizar la resistencia y la defensa de lo avanzado, para lograr nuevos avances y así neutralizar el control que pretende el imperialismo yanqui y sus aliados."

En este contexto esperanzador para los pueblos el EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL está inmerso y su fuerza e incidencia han caminado y caminarán en pos de ese futuro promisorio para las mayorías nuestramericanas, porque nuestros genes están rubricados con la impronta de la revolución continental y la construcción de la Patria Grande y Socialista.



Lidio Victoria

PROCESOS CONSTITUYENTES Y REBELION EN NUESTRAMERICA
¿Y en Colombia Que?



La historia y actualidad de la cuestión

Uno de los temas sobre los que hoy día mayor intercambio existe en las visiones que se aportan los pueblos del mundo, es sin lugar a dudas acerca de los procesos constituyentes. Efectivamente, hay un caudal muy importante de análisis, no solamente en la revisión crítica de ya viejas experiencias notables en la historia del siglo pasado, como pudo ser la confección liberal de los llamados Estados de Bienestar en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, remodelaciones que fueron el mayor punto de llegada de desarrollo dentro del sistema capitalista, manifiestamente decadente, sino sobre todo los estudios y la puesta en marcha hoy día de nuevos pensamientos políticos que trascienden ese paradigma, o sea réplicas plurales, como la complejidad misma que se busca intervenir.

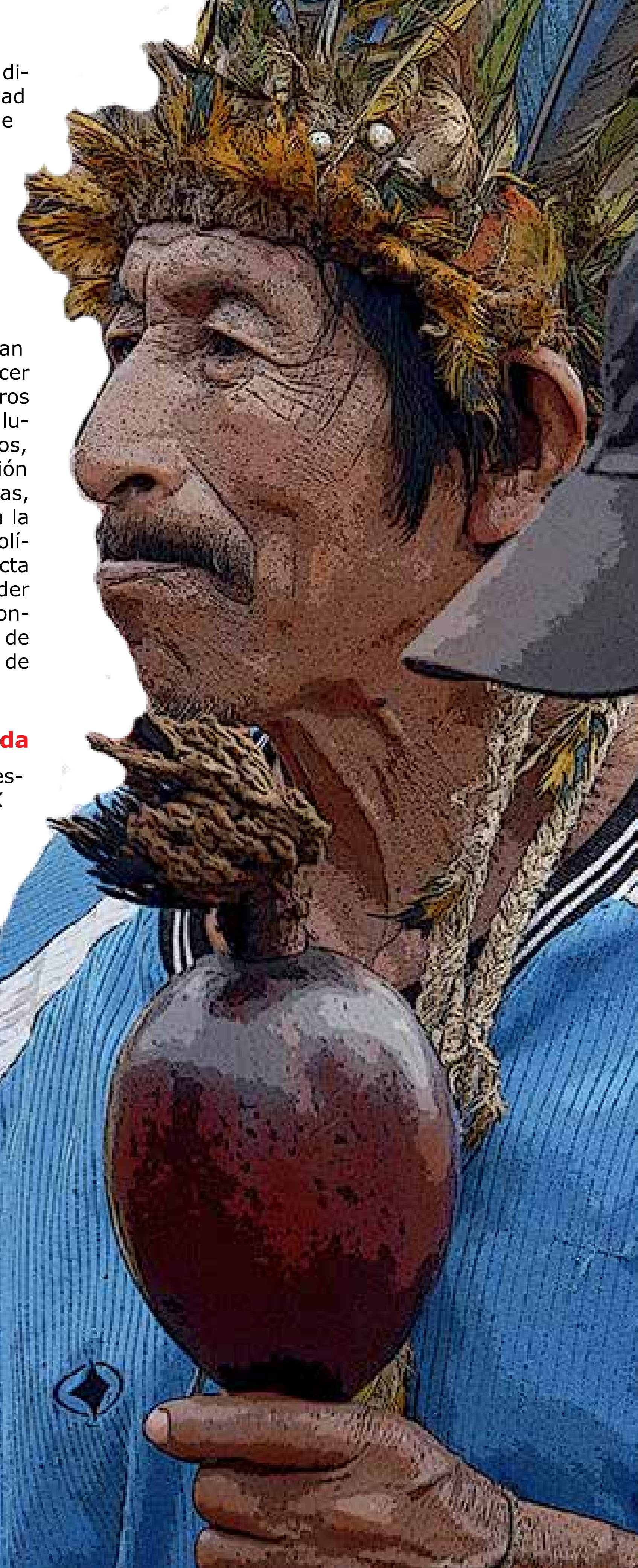
Ya es una evidencia que un solo modelo de interpretación y producción de la realidad, para un único encaje jurídico y político que simplifica la sociedad y sus contradicciones, soslayando y marginando reivindicaciones populares, es falso y debe ser revelado como insostenible y relevado por injusto. Básicamente no por la calidad teórica de sus enunciados, que nos pueden seguir sonando convenientes en el papel, sino por la distancia terriblemente lesiva entre lo que se predica y lo que se aplica. Una cosa dicta el texto y otra dice la vida en ebullición de amplios sectores de la población, de las inmensas mayorías del mundo, por fuera de los beneficios y derechos que se proclaman retóricamente en muchos pasajes constitucionales.

De ahí entonces que la más interesante transformación que se verifica respecto a los procesos constituyentes, no sea sólo la correspondiente a la especulación teórica, la que se hace en el discurso, sino la que atañe a la reflexión hecha carne: para la acción desde abajo, que liga las muy diversas formas de irrupción política, la creatividad de quiebres, las resistencias no perecederas, de movimientos sociales nuevos y más históricos, en unión de formaciones políticas que se buscan remozar o renovar proponiendo interferir y romper la normalidad marchita, acumular fuerzas para escenarios de nuevas reglas y fijar éstas en el carril de nuevas articulaciones y contenidos de poder; todo lo que una Constitución política debe reflejar.

Contrario a lo que de manera obtusa manifiestan a diario regímenes que se disponen a desconocer por la violencia, por la disuasión depravada y otros procedimientos, que esos caminos abiertos por luchas sociales y políticas han quedado taponados, cuando afirman sus voceros que una Constitución llegó para quedarse hasta el final de nuestros días, contrario a esa absurda posición no sólo contra la historia sino contra la naturaleza misma de la política, hoy día se levanta una corriente que proyecta una etapa en la que los debates sobre el poder constituyente están reconstruyéndose para contribuir a la fundamentación de un nuevo ciclo de batallas y a la probable apertura de un período de cambio revolucionario.

Antecedentes en la América fragmentada

América toda por sus propias dinámicas de desprendimiento de unas metrópolis en el siglo XIX y de contradictorio movimiento en el marco de sucesivas dependencias respecto de centros de poder neocolonial en el siglo XX, registró una más o menos uniforme tendencia liberal que se inscribe en la tradición de repúblicas supuestamente de Estados de Derecho, aunque luego ni su configuración social ni menos sus estructuras económicas respondieran a modelos de instituciones soberanas, de democracia progresiva y de arraigo de reformas para el pueblo. Muy por el contrario, organizada la subordinación económica, política y cultural mirando al norte, tanto a los Estados Unidos como a Europa, las inercias conservadoras se pronunciaron con más virulencia en nuestros países, la ideología de servidumbres prevaleció, el Estado no confesional fue una promesa, el feudalismo se recreó y extendió en convivencia con un capitalismo de ruina para las mayorías, las libertades esenciales personales y colectivas fueron una y otra vez cercenadas, el Estado se ancló en definitiva como un instrumento de plutócratas, de ricos que sólo



movían su banderas en la superficie, según vientos de conveniencia, unas veces "modernos" y abiertos según obligaran a ello ciertas luchas, como las obreras y campesinas de las primeras décadas del siglo XX, las revueltas de estudiantes, o el derecho de ampliación del voto, pero en general su proyecto fue el de unas elites diestras en el engaño, en la venta de los países a las empresas y núcleos de poder gringo y europeo.

Dicha sumisión se expresó en el aumento de la sujeción militar, que una vez comprobada la inconformidad y los procesos de organización revolucionaria en América Latina y el Caribe, enseñó su claro objetivo fascista: destruir los embriones de los actores sociales políticos de izquierda, mediante la más brutal represión, usando para ello todo el poder aglutinado por lo general en juntas militares, o en figuras similares de "excepción", distinguidas por su asalto, empleadas por las oligarquías a fin de extirparles a los "subversivos" sus alientos y de abordar posibles puentes que pudieran existir entre esa insurgencia popular, armada o no.

Las dictaduras militares se convirtieron en modelo desde los años sesenta y hasta la mitad de los ochenta, para precisamente reconvertir las sociedades liberales pregonadas, en sociedades laboratorio de políticas neo-liberales, en las que los tejidos y luchas populares se reventaron a punta de crímenes contra miles y miles de militantes, de simpatizantes o simplemente contra pobladores pobres o nichos de intelectuales y activistas que pudieran acompañar un conjunto de denuncias de esa salvaje situación o ir más allá en esas resistencias. Quedó así casi desangrada gran parte de la esperanza de cambios en nuestra América de entonces, por el terror de Estado y la aplicación de doctrinas como la de "seguridad nacional" o de "guerra de baja intensidad", con suspensión o manipulación de las Constituciones políticas, leyes y parlamentos de muchos países, es decir liquidando lo que incluso les servía a esas capas liberales, para reconcentrar esas dictaduras no sólo el poder del Estado sino todos los factores de control, cohesión y disciplina en pos de terminar o cumplir un cometido: la limpieza política y social. De ahí su carácter nazi. Como Pinochet.

Pero también, o en el fondo, su fin era dar al traste con políticas de intervención estatal redistributiva, que pudieran suponer algunos equilibrios económicos y sociales, y reemplazar esa derivación progresista, antes de algún modo contemplada en las Constituciones y leyes suspendidas (por ejemplo con el Golpe de Estado a Salvador Allende en 1973), por un proyecto que osciló entre una maqueta desarrollista y una franca multiplicación neoliberal fundamentalista, que sembró la ideología del mercado para la mayor explotación de los recursos naturales y de las personas, hundiendo por largo tiempo los compromisos de igualdad. Ese encadenamiento ha contado hasta el día de hoy con administradores de varios pelambres, por ejemplo en Chile, con herederos de ese dictador rehechos constitucional y legalmente a su medida.

No obstante el éxito al matar, esa imborrable entidad monstruosa de aquellos regímenes totalitarios no sólo comenzó tardíamente a ser algo rechazada, cuando ya daba por lograda su compleja misión de aniquilación y de ajustes estructurales, sino que las necesidades internas de re-legitimación de la derecha pusieron a tono el experimento con un eje de regulación global que al tiempo que incorporaba esos países como socios, pedía para inmunizarlos, para hacerlos del todo funcionales, unos cambios formales, y obviamente de signo. Si hablábamos antes de prolongados y despiadados regímenes militares, debía en los tiempos neo-liberales de normalización, tratarse con gobiernos civiles y "democráticos" en primera línea, y por supuesto era imprescindible en ese giro reestructurar el orden normativo, brindando mayor seguridad jurídica a los capitales y sus gestores.

Tras el hedor militar vino el perfume civil de una derecha que retoma, reforma o aviva Constituciones en diferentes países para recomponer una atmósfera de democracia burguesa. Principalmente a finales de los ochenta y a comienzos de los noventa, años que fueron una estación de dichos cambios, la mayoría cosméticos respecto a progresos, con repetidas rutinas que si bien rescataron formulaciones en relación con algunos derechos humanos y libertades (Brasil, 1988; Paraguay, 1992; Argentina, 1994; Uruguay 1996/97; Chile, 1980/2005), ratificaron conceptualmente y vertebraron los "Estados Democráticos de Derecho", a partir del salvaje orden del mercado capitalista, con precisas disposiciones orientadas a la administración neoliberal, sin contrapesos y accesos efectivos que permitieran transferencias de poder a los sectores populares históricamente usados y separados.

Incluso con posterioridad a acuerdos de paz con insurgencias que desarrollaron luchas rebeldes, el modelo en esencia siguió siendo el mismo, es decir basado en Constituciones hechas en plena guerra, por los poderes de la derecha comprometida en los escuadrones de la muerte y el genocidio, con la entrega de la soberanía, con el empobrecimiento generalizado (en El Salvador, firmada "la paz" en 1992, donde continúa vigente hasta hoy la Constitución de 1983; o en Guatemala, firmada entre 1991 y 1996, donde rige la Constitución de 1985).

La hora de Nuestramérica. Las constituciones de una nueva era

En absoluto puede darse una fecha fundacional de Nuestramérica, pero si hubiera una que deba estar en el recorrido de esa flecha salida del arco y dirigida contra lo caduco, es la del Caracazo (27-28 de febrero de 1989). Justo cuando las imágenes de muros y sistemas que empezaban a caer, enseñaban apócrifamente que la historia terminaba para las utopías sociales de emancipación, justo cuando



se enseñoreaba el capitalismo como único destino, justamente un pueblo le apuntaba a la cabeza y a los pies de su barbarie neoliberal, contestando en las calles de un país que fue condensando rebeliones de siglos, en el grito de mil seres en uno, como lo hizo Hugo Chávez junto a mujeres y hombres que en condiciones de virtual derrota dijeron no a la orden de arrodillarse.

Ese proceso social y político que comprendió un levantamiento de militares patriotas (febrero, de 1992), junto a un despertar y encuentro de conciencias que fraguaron pasos decididos a lo largo de una década de lucha paulatina que armonizó acciones diversas de alcance rebelde, con otras de aparente acoplamiento o acostumbramiento dentro de una cerrada legalidad de represión y de burla a los derechos del pueblo, como era la regla hasta 1998-1999, fue haciendo mella todo ese proceso en la ficción de que una Constitución política es el libro rubricado, punto final y de inicio de largos períodos de silencio.

Por el contrario, otra era la idea y la tarea del nuevo pensamiento bolivariano, que miraba hacia las experiencias del socialismo, en sus fracasos y en sus logros de un poco más de apenas setenta años, que redimía legados de pueblos indígenas, negros y mestizos de la América olvidada, que se hermanaba con la Cuba revolucionaria, que respetaba las luchas guerrilleras de otros países, y que enfrentaba los signos de tiempos en los que casi todos huían de sueños de liberación. Esa idea hecha puño, empujó y fue empujada como obra inteligente, en la que la nueva Constitución de 1999 no fue entendida como una más en una sucesión de variaciones para no transformar nada de fondo. Al año de ser el Comandante Chávez elegido Presidente (1998), se entendió esa nueva Constitución como un punto intermedio en la estrategia de lucha histórica, como un instrumento para el desarrollo, la representación, la organización y la potenciación de sujetos políticos populares en el ciclo de confrontaciones y confracciones nacionales, regionales y globales.

Encarnaba esa Constitución en importante medida no sólo una nueva concepción del contenido del derecho en transición, o sea del mensaje y la obligación, sino del medio que recogía aquel para trasladarlo y que consagraba ésta para fines de una cultura de resistencia, o sea para desplegar fuerzas y significados (como el nombre mismo de la República Bolivariana), que se sabían rebeldes frente a lo todavía dominante, sin la contundencia y el trance de un cambio revolucionario producto de una toma del espacio de poder, sino para la construcción del mismo todavía en el marco de una sociedad imbuida por la endemia de un sistema opresivo. Con un predicamento no de derrumbe posible y total de un orden instaurado, sino con el empleo de la normatividad como recurso relativo en un pacto que podía ser debidamente un arma jurídica en nuevas tramas de poder. En ellas no se desalojaron a los sectores oligarcas y corruptos, pero sí se inició una dura batalla que va hasta el momento presente, en el que se definen y defienden (con armas al servicio del pueblo) con legitimidad nuevos bríos y objetivos.

Un similar quehacer, se desdobló en Ecuador y en Bolivia, donde eran y son todavía más fuertes las históricas demandas de una nueva configuración por el ascendiente y la presencia de pueblos indígenas mayoritarios excluidos del poder, sometidos y represaliados de múltiples formas, dentro de la gran masa popular empobrecida, cuyos movimientos reivindicativos y de organización política fueron expulsando a los mandamás de turno, hasta ser hoy día, como Venezuela, ejemplos de lo que, no sin duras contradicciones y desfases, pueden ser los pueblos cuando toman en sus manos las herramientas de decisión y ejecución de políticas soberanas, de redistribución más democrática de la riqueza, de convertir en bien público segmentos fundamentales de la economía que era antes de beneficio exclusivamente privado, fruto del saqueo de recursos nacionales feriados desde hace siglos. La nueva Constitución de Ecuador (2008) como la de Bolivia (2009), sientan también mecanismos e instituciones de mayor participación y control popular, al tiempo que recogen paradigmas que hoy día se sitúan en la vanguardia no sólo del pensamiento político de izquierdas en el orden de teorías políticas insertas en procesos sociales de gran calado, sino, precisamente, de cuanta construcción programática quiera dirigir o proponer en serio eslabones de lucha para la salvación y dignificación de la vida humana en el planeta.

Razones nuestras, necesidades de todos

Las rebeliones en Nuestramérica portan en sus genes un sinfín de experiencias, de derrotas, de avances relativos, que han podido apilarse en esfuerzos declarativos y de acción política, muchas veces traicionados o golpeados, bien sea por represiones que directamente han descabezado procesos organizativos, o porque dirigentes e ideólogos falsarios se han desplazado o fueron comprados hacia las toldas de la derecha, de un sistema que conminó a la reforma y al pragmatismo, domesticando con el ofrecimiento de nuevos derechos y espacios de poder en enmiendas o nuevos textos constitucionales.

Esa práctica cambia cuando son los pueblos los que no solamente acceden a los procesos de decisión, sino cuando paralelamente se van constituyendo en sujetos, en titulares verdaderos de derechos verdaderos, cuando esa disposición soberana es tal en el sentido de asegurar derechos en procesos de resolución contra otros, contra enemigos y adversarios de clase, así como abrir sendas de consenso en el conjunto, para acoger en ellos exigencias del campo popular para las emancipaciones pendientes que deben surtirse sin aplazamiento: las de las mujeres, las de los pueblos originarios, las del multiculturalismo y diversidad étnica que atraviesan la razón capitalista y occidental despótica y racista, las del socialismo encaminado por humanismos que no sacrifican la tierra sino que la cuidan. Ese horizonte es el que tratan de ridiculizar otros, cuando ironizan sobre el buen vivir, porque lo asumen como es: como amenaza a la lógica de destrucción y acumulación capitalistas.

En esa "previsión del mundo", esas Constituciones alternativas son producciones políticas adelantadas, ante lo que de manera imperiosa se requiere en el planeta entero, es decir que son "creaciones" pioneras desde razones y razonamientos de los pueblos nuestroamericanos, pero que se reflexionan y que ensayan contenidos a modo de refutaciones del cuidado común, del bien común, de la preservación común, ante problemas comunes, como lo son la destrucción de la Pachamama, el militarismo, el colonialismo, la codicia, la depredación, la injusticia, la desigualdad, la privatización, la impunidad.

Es una plasmación rebelde, declarar como se expone: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos” (Preámbulo, Constitución de Bolivia, 2009). Lo es no por el texto en sí, que podrá ser reformado o sustituido por el pueblo de Bolivia, como de hecho debe ser la vocación de un ordenamiento jurídico siempre temporal y perfeccionable, del que debe habilitarse su progreso, sino por lo que dicha proposición compromete en términos de procesos históricos coherentes y fructíferos de humanidad, de tal género que dinamicen sin falsedades, sin disfraces, nuevas relaciones económicas, sociales y políticas, al tiempo que deben servir para bloquear privilegios o enfrentar asimetrías históricas, acumuladas, estructurales, culturales, que se han ido sedimentando a lo largo de siglos. Y que hoy, incluso en una lectura de los derechos humanos desde perspectivas burguesas y de centros neocoloniales, son insostenibles.

En otras palabras: lo que flamantemente se conoce hoy como neo-constitucionalismo en su vertiente progresista latinoamericana, superando el rótulo y reconociendo en ello más que los procesos de confección jurídica, lo que de ellos sirve al enriquecimiento del debate global sobre los cambios necesarios, es cierto que puede ilustrar también de manera eficaz sobre ponderaciones posibles ante problemáticas acuciantes que están viviendo países y regiones como sucede en la vieja Europa, donde emergen al día de hoy con cierto arranque pero de manera dispersa y alicaída, una serie de movimientos y expresiones sociales, de minorías y mayorías segregadas, de nacionalidades y territorios subyugados, de autonomías retrasadas, de poblaciones vulneradas por el neoliberalismo que viene implementándose despiadadamente creando más crisis, haciendo añicos lo que fue el aclamado “Estado de Bienestar”, que piden más participación, resolver los problemas de cohesión, de inclusión, de freno a los recortes sociales, de falta de soberanía, de corrupción, de latrocinio, etc. Así mismo, estos procesos de empoderamiento desde Nuestramérica están sirviendo y pueden ser todavía más útiles para la discusión de propósitos constituyentes y de lucha por distintas vías tanto en el mundo árabe como en la África negra, que presta atención a esta dimensión del poder desde abajo, de convenir destronar lo tiránico, desde sus propias particularidades, pero en posible confluencia con otros pueblos.

¿Para Colombia qué?

Todo lo expuesto enmarca lo que buscamos sostener racional y consecuentemente como ELN, no sólo en un momento de cambios en la dialéctica política en el país, al abrirse la posibilidad de conversaciones con el gobierno que representa un Estado y un proyecto de poder que han hundido la nación en condiciones de pobreza y subordinación, como feudo del imperialismo y de empresas transnacionales que explotan nuestra tierra y a nuestra gente, sino al reconocer que existen procesos regionales en Nuestramérica y en el mundo que, tras muchas punzantes frustraciones, hacen levantar la cabeza en señal de dignidad y no las manos en señal de rendición, y definir por lo tanto rumbos y consensos de poder democrático en una nueva época de inaplazables transformaciones acorde con una realidad de debacle.

Tal es, no de ahora sino de tiempo atrás, la propuesta nuestra y de otras fuerzas revolucionarias, bien como Convención Nacional o como Asamblea Constituyente. Hoy resurge el debate, en torno a mecanismos de refrendación de posibles acuerdos, y por ello tanto nosotros como las FARC-EP lo hemos puesto en la escena de la reconstrucción del país, en la naturaleza misma, en el origen mismo, en el proceso mismo y en la misma capacidad de decisión de las partes contendientes que buscan, sin derrotados ni vencedores, establecer las bases de una nueva Colombia:

“Esta solución política requiere de garantías para que la sociedad participe e instrumentos que viabilicen la transición a una sociedad en paz con justicia social. Una Asamblea Nacional Constituyente sería un mecanismo idóneo por cuando convocaría a nuevos y auténticos consensos construidos con la más amplia y plena participación de la sociedad. Para que dicha Asamblea Nacional Constituyente cumpla los objetivos de asegurar la paz y la justicia social para los colombianos debe contar con la participación representativa de la insurgencia y la participación democrática de todos los sectores que integran la nación. Que tanto su convocatoria, su composición y su mandato constituyan un verdadero tratado de paz estable y duradera para Colombia” (Declaración de junio de 2013, Nicolás Rodríguez Bautista, Comandante ELN y Timoleón Jiménez, Comandante de las FARC-EP).

La Constitución de 1991 nació y pereció entre las componendas de quienes decidieron prolongar la guerra sucia, la impunidad, la rapiña, la entrega del país a poderes foráneos y al fundamentalismo de la política neoliberal contra el pueblo. De nada valieron hermosas redacciones, cuando precisamente por dos siglos se ha consumado una sistemática violación a principios de derechos suscritos desde los procesos de la independencia por elites que los traicionan. Ese engaño no va más.

Para nosotras/os no es la Constituyente sólo el instrumento de arreglo hacia la paz con justicia que lleve a una nueva Carta política, el cual deberá con garantías ciertas regir hacia adelante, sino el derecho permanente a ese impulso, como proceso hacedor en el que se debe reflejar una nueva ordenación del poder por sujetos que hagan valer su centralidad y su capacidad de llegar a pactos, con un ejercicio del poder popular que sea respetado. Nuestra rebelión entonces podrá cambiar de forma, de métodos, pero no habrá cambiado de opción ética e histórica.



Carlos Ramos

El Imperio en su Laberinto

La crisis sistemica de los Estados Unidos

El imperio al borde de la bancarrota

A inicios de octubre el país más poderoso del mundo estuvo a punto a declararse en quiebra. Anunciando la posible morosidad (default) del pago de su deuda interna, el gobierno de Barak Obama le solicitó al Congreso de Estados Unidos el derecho de seguir prestando dinero de las arcas nacionales, aumentando el techo límite de la deuda pública previamente establecido. Mientras se esperaba la decisión del Congreso, el gobierno cerró las puertas de sus oficinas públicas e instituciones federales en todo el país, dejando en la calle a más de 825,000 trabajadores, ya que carecía de los fondos para pagar los salarios.

Los medios masivos enfocaron la mirada del público norteamericano y la comunidad internacional en la disputa entre los partidos Demócrata y el Partido Republicano desviando la atención del pueblo estadunidense de las raíz real del problema: que la causa principal del endeudamiento del imperio es su insistencia en fungir como "policía del mundo", con aventuras guerreristas en distintos rincones del mundo y que persigue una expansión más allá de sus capacidades. Finalmente, la Tesorería de Estados Unidos tomó la decisión de aumentar la deuda en $1 billón (millón de millón) de dólares.

Las deudas internas y externas de Estados Unidos son de tan astronómico tamaño que la cantidad de ceros no cabe en la imaginación. De acuerdo a las fuentes oficiales de la Tesorería de Estados Unidos, la deuda pública (o interna) ha superado los $17 billones (millones de millones) de dólares, mientras que la deuda externa está por encima de los $5 billones (millones de millones), con China y Japón como los principales acreedores. Una inmensa proporción de esa deuda es causada por la cruzada militar imperialista que, solamente en el caso de las invasiones/guerras de Afganistán e Irak, han consumido la suma casi inconcebible de $6 billones de dólares. Pero tal vez el dato más determinante no es el costo de esas dos guerras sino el hecho de que los EE.UU. no las ha podido ganar.



Como concluye el investigador mexicano Alfredo Jalife-Rahme, «el costo del aventurerismo militar del bushismo durante una década en Medio Oriente […] mermó considerablemente las arcas de Estados Unidos y profundizó tanto su deuda impagable como sus déficit descomunales".

Auge y declive de la hegemonía imperial

Recientemente, Zbigniew Brezinski, ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró que la época de dominación de Estados Unidos tenía los días contados. De igual manera, Dick Cheney hace poco se lamentó que "los adversarios ya no temen a EE.UU." Los comentarios parecen constatar una realidad que se ha venido registrando desde hace unos años: el acentuado proceso de declive y decadencia estructural del imperialismo norteamericano.

El periodo cumbre de la hegemonía mundial estadounidense inició a partir de 1945, con la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, los Estados Unidos eran un país deudor, que luego pasó a ser el principal acreedor del mundo, financiando la histórica reconstrucción de la devastada Europa a través del Plan Marshall. Ser acreedor y no deudor mundial es clave para sostener una posición de poder ante los demás países, ya que eso te da la capacidad de incidir sobre sus políticas internas y presionarlos para que hagan cosas que, en otras circunstancias, no harían.

La hegemonía imperial se selló soltando bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, no para conquistar una victoria definitiva en la guerra de Pacífico (que ya las fuerzas aliadas habían ganado), sino como un mensaje inequívoco al mundo que la mayor potencia militar era capaz de desatar devastaciones inimaginables contra cualquiera que desafiara su proyecto de dominación.

Durante la Guerra Fría, el mundo se disputó entre los dos polos de la URSS y el bloque occidental. Pero a finales de los 1960, se hacía evidente la clara superioridad económica y militar de los Estados Unidos sobre la URSS. Sin embargo la crisis capitalista de 1973, sumado a la derrota yanqui en Vietnam, el triunfo de la revolución islámica en irán (1979) y la revolución popular sandinista en Nicaragua (1979), mostraron grietas en dominio mundial que podían ejercer los Estados Unidos.

Con el desmoronamiento de la Unión Soviética, el mundo se tornó unipolar, y los EE.UU optaron por sellar su nuevo dominio mundial con la primera Guerra del Golfo. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 fueron utilizados por los neoconservadores (Bush, Cheney, Rumsfeld, etc.), para lanzar la gran cruzada anti-terrorista mundial, proyectando una "globalización militar" imperial, lo cual dio como resultado las derrotas militares estratégicas en Irak y Afganistán, dos hechos que marcan el suicidio de la hegemonía imperial.

La incapacidad de imponer su voluntad en Siria, frenado tanto por el posicionamiento de Rusia y China, como también por el rechazo del pueblo estadounidense a esa aventura guerrerista, han puesto al relieve los límites del poderío imperial.

Otros indicadores de la crisis sistémica del imperio

La supremacía del dólar estadounidense ha sido un factor dominante de la dominación política-económica del imperio. Pero resulta que para financiarse en medio de su "crisis sistémica", el imperialismo norteamericano ha recurrido a la impresión indiscriminada de dólares, inundando al mundo del billete verde, provocando así su devaluación. Obviamente, el peligro de que Estados Unidos se declare en bancarrota debilita aun más su moneda. Mientras tanto, otras monedas, como el Yuan chino, ha venido ganando fuerza, con posibilidad de convertirse en una divisa de reserva en Asia Sudoriental. De hecho, ante la crisis de liquidez de los Estados Unidos, China y Japón firmaron un acuerdo para dejar de utilizar el dólar en sus intercambios comerciales, otro duro golpe para la hegemonía imperial.

A esa realidad le podemos sumar otras señales de la decadencia de la hegemonía imperial tales como:

- El haber sido desplazado por China como la mayor potencia manufacturera mundial.
- La pérdida relativa de supremacía como potencia científica del mundo ante el ascenso de competidores como China, Turquía e Irán
- La reciente intervención de Rusia en la crisis de Siria, forzando a Occidente a aplazar indefinidamente la intervención militar, hecho que respalda el temor de Dick Cheney, que "sus adversarios ya no les temen."
- El acuerdo nuclear con Irán, que permite a la nación persa continuar con su programa nuclear para uso pacifico.
- El reciente llamado internacional que hizo China, convocando a desamericanizar el orden mundial.
- El deterioro de los niveles de vida de las grandes mayorías de la población norteamericana.
- Como consecuencia de lo anterior, la agudización de la lucha de clases al interior del imperio, con el aumento de la pobreza, el desempleo y la marginalidad en EE.UU. El creciente conflicto de clase al interior del imperio se ha hecho vi-

sible por con el surgimiento de movimientos como el Ocupa Wall Street, por un lado, y el ultra-derechista Tea Party, por el otro.

Hacia una nueva Estrategia del Pentágono

La crisis sistémica que padecen los Estados Unidos les obligan a desmontar el proyecto de "globalización militar" de la era Bush. Las dificultades presupuestarias implican recortes fiscales en todos los terrenos, el militar incluido. De hecho, en 2012 el Pentágono anunció un recorte considerable de medio billón de dólares, escalonado a 10 años. El imperialismo está obligado ahora a "hacer más con menos", a reordenar sus recursos militares de tal manera que pueda mantener su dominio, y crea una estrategia de "huella ligera", cuyos elementos centrales son:

- Ante la incapacidad de asumir unilateralmente los costos de las operaciones militares, se buscan aliados que puedan compartir recursos, costos y responsabilidades. De ahí que surgen cada vez más "operaciones militares conjuntas", como el haber utilizado a la OTAN para invadir a Libia y para hostigar clandestinamente a Siria, o como también las operaciones realizadas por equipos de SEALS compuestos por efectivos norteamericanos junto con otros de la Brigada Naval Especial de Corea del Sur (2012).
- La utilización de fuerzas "testaferras", como parte del modelo de operaciones conjuntas, que pueden ser mercenarios tipo Blackwater o grupos gubernamentales civiles, cada vez más militarizados, caso Siria y Libia.
- Se quedan atrás las invasiones a gran escala y ocupaciones de amplia base, se reducen considerablemente el número de efectivos terrestres como de la marina, estrategia que incluye el retiro de tropas de Irak y Afganistan, dos guerras terrestres desastrosas.
- Se mueve hacia un modelo militar ligero de fuerzas ágiles y de alta tecnología.
- Se depende cada vez más en la guerra robótica, con una creciente utilización de drones (artefactos voladores remotamente tripulados) en todo tipo de operaciones.
- Hay mayor utilización de la inteligencia y la militarización de la misma. El Pentágono ha creado un nuevo Servicio Clandestino de Defensa, que aplica la inteligencia más allá de las fronteras del terreno de la guerra.
- La vigilancia y el lanzamiento de ataques cibernéticos (el Pentágono ya dispone ya de un centro de comando propio para la guerra cibernética.)
- Un eje significativo del nuevo "giro" estratégico del imperialismo ha sido, a la vez que retira tropas de Irak y Afganistán, concentrarse en la región Asia-Pacífico (donde tiene planeado trasladar el grueso de su armada) con el doble propósito de contener a China y fracturar y contrarrestar a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Con este fin promueve la Alianza para el Pacífico – con los principales aliados de EE.UU. en América Latina - y la intersección de este proyecto con la Asociación Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés) – con los principales aliados de EE.UU. en Asia.



Nuestra América y Colombia En la mira estratégica del imperialismo

Uno de los hechos que más ha minado la hegemonía norteamericana es Nuestra América rebelde, que durante más de una década ha venido desafiando los designios del imperio en el territorio que aun considera como su "patio trasero". No podemos perder de vista que Nuestra América es el espacio vital de recomposición hegemónica del imperialismo y la pérdida de dominio ante el movimiento integrador y unitario latinoamericano - visibilizado en el ALBA, CELAC, UNASUR y Mercosur – representa una subversión mayúscula a la estrategia de dominación estadounidenese.

Nuestra América mantiene un valor estratégico en el momento político actual. Desde la perspectiva de los recursos naturales, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (2012), en su informe titulado "Sosteniendo el Liderazgo Global de Estados Unidos: Prioridades para la defensa en el Siglo XXI", sostiene que los recursos naturales son sujetos y factores de seguridad. En particular, el agua, los alimentos, los minerales y la energía. Nuestra región es un reservorio natural, pues posee el 25% de los bosques del planeta, 33% de los recursos hídricos renovables y el 12% de la superficie cultivable. A ello se suman los recursos mineros y de otras industrias extractivas, dado que la región reúne el 65% de las reservas planetarias de litio, el 49% de plata, el 44% de cobre y ocupa el segundo lugar en el mundo en reservas de petróleo.

Por ello, la recuperación del control de la región se vuelve un asunto prioritario para el proyecto de recomposición hegemónica de EE.UU.

En ese universo de acción político-militar, Mesoamérica es el espacio privilegiado. Allí cuenta con el mayor número de aliados – México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Colombia (que forma parte del Proyecto Mesoamericano desde 2008).

Es en Mesoamérica y la cuenca de Gran Caribe donde se concentran sus bases y posicionamientos militares, incluidas las bases de Colombia, de Panamá, de Aruba-Curazao, de Comapala en El Salvador, de Palmerola en Honduras, de Guantánamo en Cuba, y la presencia de más de 22 mil efectivos norteamericanos en Haití a partir del terremoto (2010) y la Iniciativa Mérida en México. Todo esto dentro del dispositivo de comando que posee



en su propio territorio con sus grandes bases en La Florida y en el "Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Estas bases obedecen el nuevo principio operativo del Pentágono que dicta que "lo importante no es estar, sino llegar rápido." Desaparecen las grandes (y muy costosas) bases militares, como Palmerola y la (ex) Base Aérea Howard de Panamá que son sustituidas por bases más pequeñas, administradas por gobiernos locales (bajo el principio de recursos y logística compartidos), que le permiten a las fuerzas armadas de EE.UU. desplegarse con rapidez, aplicando el principio de "salto de rana".

En este universo de militarización, Colombia continúa siendo el país que más ayuda militar norteamericana recibe (y el tercer receptor del mundo), por tanto el Comando Sur continúa contando con Colombia como su ficha militar y aliado político principal. Con más de medio millón de soldados, Colombia tiene el ejército más grande y más poderoso de todo el hemisferio (exceptuando el de EE.UU, por supuesto). La nueva estrategia militar de EE.UU., que plantea la necesidad de compartir recursos, costos, y responsabilidad en operaciones militares, necesitará de esa monstruosa maquinaria militar para sus actividades desestabilizadoras en la región.

El Plan Colombia es considerado un éxito, pero como paradigma contrainsurgente y de control social y territorial y no como modelo de combate al narcotráfico (para lo que ha resultado un fracaso). Por ello es promovido como un modelo reproducible y exportable, como ha sido el caso con la Iniciativa Mérida, que no es otra cosa que la versión mexicana del Plan Colombia, un paquete de asistencia militar para "combatir el narcotráfico y el crimen organizado."

Colombia cumple fielmente su papel en la nueva estrategia del Pentágono, como exportador de su modelo de "seguridad", entrenando cuerpos represivos en países como Honduras, Paraguay y México, a la vez que también exporta paramilitarismo a Venezuela para participar en planes de magnicidio y desestabilización.

El síndrome del animal acorralado

Registrar la crisis sistémica y el declive del imperialismo norteamericano no significa por un solo momento que debemos bajar la guardia y subestimar su capacidad de hacer daño, pues la historia ha demostrado que no hay nada más peligroso que un imperio en decadencia, que actúa con la ferocidad de un animal acorralado. Falta solo hacer memoria de la brutalidad con la que se ensañó el decadente imperio francés contra el pueblo argelino en su lucha de liberación.

Lo cierto es que, ante la demostrada incapacidad de EE.UU. para imponer orden en el Medio Oriente (Egipto, su aliado más cercando después de Israel, puede acabar sumido en una guerra civil), y ante el creciente poder de sus competidores, como China, y Rusia, Nuestra América se vuelve prioritario.

Por ello, es de esperar que las campañas imperiales de desestabilización directa e indirecta en los países del bloque progresista y revolucionario nuestraamericano se intensifiquen en el periodo venidero. Ese es el contexto que explican acciones como la reactivación del la IV Flota, los golpes de estado en Honduras y Paraguay, la permanente campaña de desestabilización contra Venezuela y las nuevas estrategias del Pentágono para aumentar la capacidad operacional en América Latina y el Caribe.

Para los demócratas, progresistas y revolucionarios de Nuestra América la unidad se torna un asunto estratégico. Mantener la guardia en alto, saber cerrar filas unificadamente ante las maniobras del enemigo y profundizar los proyectos integradores y emancipadores son retos determinantes del momento histórico. En las palabras de José Martí: "Los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas. Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes."

A los Compañeros
de Luchas y de Sueños
de Nuestramerica y el mundo
abrazo fraterno
cargado de esperanzas y futuro.

